

## Día Internacional contra la Corrupción 2024

---



El 9 de diciembre de 2024 con motivo de la conmemoración del “Día Internacional Contra la Corrupción”, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la JUTEP realizó la “Jornada Académica sobre la Lucha Contra la Corrupción”, la cual se llevó a cabo en el Salón de Eventos del Palacio Legislativo.

La jornada contó con la valiosa participación de distinguidos expositores y expertos en la materia, quienes compartieron sus conocimientos y perspectivas sobre las mejores prácticas para prevenir y combatir la corrupción en nuestro país.

El Dr. Carlos Delpiazzo expuso sobre la relevancia de la transparencia y ética pública en la prevención de la corrupción, y a su vez, cómo la desinformación constituye un grave problema para los organismos de control. Subrayó la importancia de la capacitación de los funcionarios en estos temas, así como el desarrollo de estos conceptos a temprana edad en los individuos.

El Dr. Juvenal Javier recordó el vínculo y compromiso formal de los funcionarios como servidores públicos contenidos en los Artículos 58 y 59 de la Constitución de la República.

El Dr. Jorge Rodríguez Pereira compartió sus reflexiones sobre los dilemas éticos que conlleva la Inteligencia Artificial y la necesidad de su regulación legal, bregando para que niños y jóvenes estén debidamente preparados para una sociedad altamente tecnológica que avanza de forma vertiginosa.

La Dra. Ximena Pinto Nerón expuso sobre la Integridad de los Servidores Públicos como el antídoto contra la corrupción. A través del análisis de la normativa vigente, se reflexionó sobre el alcance, las responsabilidades e implicancias del Principio de Integridad en el obrar diario de los servidores públicos. Además, destacó el Artículo 28 de la Ley 17.060, el cual establece que todo funcionario público debe realizar un curso de capacitación al ingreso a la función pública, y luego uno de actualización cada tres años.

## Presentación

---

**Leticia Nasso (Moderadora):** Buenos días a todos. El Directorio y funcionarios de la Junta de Transparencia y Ética Pública les da la bienvenida y agradece su presencia.

Un año más nos encuentra reunidos conmemorando el Día Internacional contra la Corrupción, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2003. Cada 9 de diciembre es una fecha crucial para reflexionar sobre uno de los desafíos más persistentes y devastadores que enfrentan las sociedades modernas.

Importantes organizaciones en todo el mundo aúnan esfuerzos para lograr avances en el tratamiento de este complejo fenómeno social, político y económico fomentando una conciencia global sobre corrupción, sus consecuencias y la necesidad de adoptar medidas eficaces para combatirla.

Este evento busca promover la reflexión, la toma de conciencia y el compromiso desde nuestro país.

Contamos con la participación de destacados panelistas de primer nivel, que expondrán compartiendo sus saberes y experiencias sobre el tema Corrupción, con una mirada objetiva e innovadora; Dr. Carlos Delpiazzo, Dr. Juvenal Javier, Dr. Jorge Rodríguez Pereira y Dra. Ximena Pinto Nerón.

Damos comienzo invitando a la Dra. Gabriela di Longo, Presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública quien con sus palabras dará el marco introductorio al evento.

**Dra. Gabriela di Longo:** Buenos días en nombre el Directorio y de los funcionarios de la Junta de la Junta de Transparencia y Ética Pública, JUTEP, les doy nuevamente la bienvenida en representación ahora de la JUTEP a la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción.

Es un día que fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2003. Es un día que nos lleva a reflexionar sobre un tema que es de suma importancia para los ciudadanos y también nos lleva a reafirmar el compromiso con la transparencia y con la integridad a través del llamado al actuar y a luchar por un mundo en que la corrupción no tenga cabida y donde cada uno de nosotros juegue un papel activo en esta batalla.

Existen varias causas de corrupción en el Uruguay, así como también consecuencias de la misma y hay también varias medidas y estrategias para combatir la corrupción. Sería imposible poder nombrarlas todas, pero sí me voy a referir en cada uno de estos aspectos a dos puntos cruciales que considero que son importantes en cada uno de estos temas.

Como causas de la corrupción en Uruguay más importantes, entiendo que está la debilidad de las instituciones encargadas del control y de la prevención, en donde la falta de recursos y de formación propician el ingreso de la corrupción. Asimismo, la falta de transparencia y la opacidad de ciertos procedimientos administrativos pueden facilitar que ingresen actos de corrupción a la Administración.

La Sociedad Civil y los medios de comunicación son fundamentales para ejercer presión y para demandar mayor claridad en el uso de los recursos públicos.

En cuanto a las consecuencias de la corrupción considero que hay dos que son fundamentales y son la desconfianza en las instituciones, y el impacto económico significativo. En cuanto a la desconfianza las instituciones, la corrupción erosiona la confianza de la ciudadanía en esas instituciones, lo que puede llevar a una menor participación política y un debilitamiento del tejido social.

La corrupción produce también un impacto económico significativo ya que como consecuencia de la misma se desvían recursos que podrían utilizarse en educación, salud, infraestructura, y en otros aspectos.

Como medidas y estrategias para combatir la corrupción entiendo que hay tres que son fundamentales:

- Una es la transparencia y la rendición de cuentas a través del dictado de leyes y de normativa que refieran al tema.
- La otra que es muy importante es la participación ciudadana a través de fomentar la participación en el control de la gestión pública.
- Y una tercera es la fiscalización a través de organismos como la JUTEP, que juegan un papel crucial en la vigilancia de la conducta de los servidores públicos.

Y en tal sentido corresponde hacer una pequeña y muy breve reseña de los cometidos, los importantes cometidos que tiene la JUTEP.

Al respecto me gustaría empezar con un aspecto o un cometido que creo que es desconocido por la mayoría de la ciudadanía, y está establecido en el Artículo 3o. numeral 9o de la Convención Interamericana contra la Corrupción y lo voy a leer para que se entienda específicamente ese cometido tan importante: " Por dicho artículo de la Convención Interamericana contra la Corrupción la JUTEP es el organismo en Uruguay que ejerce la función de control superior con el fin de prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas".

Lo repito, "es el órgano de control superior, que ejerce la función de prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas ". Esa competencia, ese cometido de la JUTEP lo realiza actualmente con catorce funcionarios.

No me voy a referir más al tema, pero simplemente para que entiendan que a nivel internacional la JUTEP es el órgano que representa esta prevención y combate a la corrupción, y es un organismo que hoy por hoy, actualmente cuenta con catorce funcionarios.

Uno de los cometidos que quizás sea conocido por todos los presentes y la mayoría de la ciudadanía, es la recepción de las Declaraciones Juradas.

La JUTEP recibe Declaraciones Juradas de los funcionarios públicos obligados, muchas de las cuales quedan reservadas y otras se publican. A partir del 2020, se publican las Declaraciones Juradas no sólo del Presidente y Vice Presidente de la República como pasaba antes de 2020, sino que se publican Declaraciones Juradas de muchos actores políticos y funcionarios públicos no políticos. Hay Declaraciones Juradas de Ministros, Senadores, Diputados, más de ochocientas Declaraciones Juradas.

Eso habilita a lo que decíamos hoy del control ciudadano de la corrupción; cualquier persona en cualquier lugar del mundo ingresa a la página de JUTEP y busca las Declaraciones Juradas de todos los obligados que presentan su Declaración Jurada al inicio de la función, cada dos años, y al egreso. Eso permite que se puedan comparar las distintas Declaraciones Juradas. Y reitero, fue a partir de 2020 que se publican muchas Declaraciones Juradas mientras que antes se publicaban solamente las del Presidente y Vicepresidente. Actualmente las Declaraciones Juradas se presentan en forma documental y también por vía electrónica.

Uno de los cometidos que implica también la obligación de la JUTEP es la de estudiar esas Declaraciones Juradas. Por ley se establece que tenemos la obligación del estudio del cinco por ciento de las Declaraciones Juradas que fueron presentadas en forma aleatoria, tiene que hacerse ese estudio, que, por motivos obvios de falta de personal, ese cometido no se está cumpliendo actualmente.

Pero más allá de la recepción de las Declaraciones Juradas la JUTEP tiene también dentro de sus cometidos la recepción de las denuncias que se hacen contra los funcionarios públicos por hechos de corrupción o por el hecho de violación del Código de Ética.

En ese aspecto antes de 2020 las denuncias eran presentadas físicamente en las Oficinas de JUTEP o si no a través del correo electrónico.

A partir de 2020 con el sistema del Portal de JUTEP, las denuncias pueden también presentarse a través de ese Portal, ya sea en forma anónima o en forma nominada. Eso incrementó muchísimo la cantidad de denuncias que recibe la JUTEP. Y en base a esas denuncias se hacen estudios, se forma expediente, se estudia y se investiga esas denuncias presentadas.

Pero existe otro cometido que es muy importante, justamente por lo que hablamos hoy de que a nivel internacional y por la Convención Interamericana contra la Corrupción la JUTEP es el organismo encargado del control y de la fiscalización y la prevención de la corrupción en Uruguay, justamente a raíz de esto tiene una participación a nivel internacional muy importante que también es desconocida por la mayoría de los ciudadanos.

En ese aspecto, la JUTEP participa en varios organismos, como el MESESIC, que es el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción.

Es un mecanismo anti corrupción de OEA, reúne a treinta y tres de los treinta y cuatro Miembros para analizar los marcos jurídicos e institucionales de acuerdo a las disposiciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción.

El Comité de Expertos de MESESIC, el cual la JUTEP integra, es el órgano responsable del análisis técnico de la implementación de la Convención de los Estados Parte a través de la aprobación de informes anti corrupción de los Estados analizados.

Existe allí un intercambio de buenas prácticas y de temas de interés colectivo con miras al fortalecimiento de la cooperación contra la corrupción.

De igual forma la JUTEP en su calidad de órgano encargado del combate a la corrupción, y de su prevención, interviene en la UNCAC que es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, cuyo principal órgano de toma de decisiones es la Conferencia de los Estados Parte.

Y un tercer organismo, son muchos más, pero vuelvo a decir, estamos siendo muy acotados por los tiempos, un tercer organismo internacional en que participa la JUTEP es la UNODC que es la Oficina de Naciones de Naciones Unidas contra la droga y el delito.

Tiene como uno de sus objetivos el desentrañar la complejidad de la corrupción y ayudar a los Estados a comprender el impacto y las consecuencias de la misma en las áreas específicas, para diseñar estrategias y soluciones efectivas e integrales.

Es por ello que este organismo internacional ha creado distintos grupos de trabajo que se centran en áreas específicas como lo son la corrupción en Género, la corrupción del deporte, las estrategias nacionales anti corrupción y la gestión de riesgos entre otros.

En este sentido JUTEP ha representado al país en el ámbito internacional teniendo una participación activa y realizando exposiciones en los distintos paneles a los cuales fue convocada.

Como conclusión cabe señalar que si bien Uruguay ha demostrado avances en el combate de la corrupción y mantiene índices relativamente bajos en comparación con otros países de la región el desafío persiste.

La corrupción es un problema que requiere de una vigilancia continua, de una ciudadanía activa y un compromiso firme por parte del espectro político y de las instituciones para fortalecer la democracia y garantizar el bienestar de todos los ciudadanos.

El futuro dependerá de la capacidad de la sociedad para exigir transparencia y rendición de cuentas; hoy les invito a reflexionar sobre cómo cada uno de nosotros puede contribuir a la lucha contra la corrupción, ya sea en nuestros barrios, comunidades, lugares de trabajo, o nuestras vidas cotidianas.

Para finalizar agradezco la presencia de tan calificado panel que nos acompaña el día de hoy y que tendremos el placer de escuchar sus tan interesantes intervenciones.

Muchas gracias, y bienvenidos a la actividad.

*Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Profesor Emérito de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Participó además en la redacción de normas de contabilidad y administración financiera, es autor de numerosos libros y artículos en sus áreas de especialización, publicados en el Uruguay y en el exterior.*

## **Desinformación, Transparencia y Ética Pública**

---

Muy buenos días, por supuesto siempre es muy grato tener la oportunidad de hablar en la Casa del Poder Legislativo, que es la sede más representativa de la Democracia nacional, y mi propósito es reflexionar sobre tres aspectos que quizás puedan parecer no vinculados entre sí, pero que creo que lo están, cuales son la desinformación, la transparencia y la ética pública.

### Introducción

Estamos en presencia de un concepto netamente jurídico, el de transparencia, un concepto meta jurídico, el de la ética pública, aunque con un alto grado de juridización, y ambos forman parte del nombre de la Junta de Transparencia y Ética Pública que hoy nos convoca.

A su vez, la información es un aspecto esencial del control. No hay control posible sin información y hoy, la desinformación es uno de los problemas grandes que enfrentan los organismos de control y seguramente también la JUTEP.

### Sobre la desinformación

Muchas veces lo que trasciende a la prensa, lo que se conoce públicamente son aquellos casos en los cuales la corrupción es muy importante, rampante, trascendente, y no se visibiliza la que quizás es más importante: la corrupción de la cotidianeidad, la de todos los días, en las Oficinas Públicas, en el ámbito privado, en el ámbito de las relaciones inter personales, donde muchas veces la denominada "viveza criolla", no es una virtud. A veces lo es, a veces lo es, pero muchas veces la viveza criolla es una manifestación de corrupción en términos de aprovechar de algo que no me pertenece o de abusar de algo a lo que puedo acceder oblicuamente, entre otras muchas manifestaciones.

Es más, en el caso de la JUTEP, se reciben permanentemente denuncias -denuncias que ahora pueden ser incluso anónimas y a través de medios electrónicos- y puede ocurrir, y estoy seguro que muchas veces ocurre, que esas denuncias son verdaderos infundios o difamaciones que se hacen trascender a la prensa y respecto a las cuales después nadie dice nada y entonces estamos frente a una práctica de desprestigio a otro que es una maniobra de corrupción, sin respuesta desde la JUTEP y desde nuestro sistema institucional.

Por lo tanto me parece que si tuviera que rotular con una idea lo que quiero compartir con ustedes, es que la corrupción no se neutraliza solamente con la represión (aunque, por supuesto, la represión es muy importante) sino que, como todo mal, es mejor ahogarlo en abundancia de bien y entonces yo creo que es muy importante -quizás más importante en la labor que todos podemos llevar adelante- la prevención, la capacitación que además es un cometido específico de la JUTEP según el artículo 4º, numeral 7º de la Ley 19.340 de 28 de agosto de 2015, junto a la difusión de las buenas prácticas, la capacitación y el fomento de las virtudes: la invitación a trabajar bien.

A veces el trabajo bien hecho, lamentablemente entre nosotros, merece desprestigio. Cuántas veces entra alguien nuevo a trabajar en una oficina, y le dicen "no, botija, tan rápido no". ¿Por qué se sonríen? Porque saben que lo que estoy diciendo es verdad. Lo grave de la cuestión es que esto está tan incorporado a nuestra idiosincrasia que lo vemos como normal y que sea normal no quiere decir que esté bien, que sea normal no quiere decir que no sea carente de ética como muchas veces lo es.

La desinformación, como lo indica el prefijo "des", es la distorsión de la información, y la gran preocupación deriva de la dificultad que muchas veces hay para revertir la desinformación que puede ser una mentira, que puede ser una difamación, o que puede ser una distorsión de la verdad, que a veces no hay peor mentira que una media verdad.

Lo normal, o lo común, es que la desinformación nunca es positiva, la desinformación nunca es para bien, la desinformación siempre es negativa, es desprestigiante, o es mentirosa; no es ajustada a la realidad. Y este es un desafío muy importante no sólo para órganos de control como la JUTEP sino también para los Servicios de Inteligencia del Estado y para los órganos de control electoral. Hemos visto por ejemplo en México y Estados Unidos, la incidencia de la desinformación en las campañas electorales que inciden en las decisiones de la gente.

Hay que poder distinguir, la JUTEP en esto tiene un desafío a encarar muy importante que es la diferenciación entre la información real, y la información falsa, sobre todo en materia de denuncias cuando está involucrado el buen nombre, el honor, etc., de las personas.

No recuerdo exactamente en qué ámbito fue cuando al Dr. Héctor Gros Espiell en el exterior lo incorporaron a una Academia de Derecho de un país europeo y su conferencia versó sobre que "El derecho al honor también existe".

El artículo 7º de la Constitución encabeza la Sección de Derechos, Deberes y Garantías hablando de los derechos que, por ser inherentes a la dignidad humana, son anteriores a la Constitución. La Constitución reconoce y garantiza, pero no otorga y ahí está mencionado el derecho al honor, y un grande de Derecho Constitucional que ya no está entre nosotros, el Profesor Gros Espiell, decía que el derecho al honor también existe, pero muchas veces se lo mancilla y no pasa nada.

El contenido discriminatorio que puede tener además la desinformación, puede fomentar o conducir al odio, a la difamación, al desprecio de otro, y todo esto no puede ser ajeno a la lucha contra la corrupción y la defensa de la ética pública, porque la ética pública -esto es bueno también señalarlo- es una: aunque a califiquemos de pública o privada según el ámbito en que la ética se desarrolla, lo cierto es que resulta muy difícil que alguien sea ético puertas

adentro y no lo sea puertas afuera y al revés, porque en definitiva cuando hablamos de la ética, de lo que estamos hablando es de la calificación como buena o mala de las actitudes humanas, y este no es un rol del Derecho aunque como vamos a ver más adelante, vivimos un importante proceso de juridización de la ética pública justamente para que existan medios desde el Derecho para reprimir conductas éticamente reprochables, pero esas conductas son éticamente reprochables aunque el Derecho no las castigue; son reprochables per se. Como nos enseñaban en Introducción al Derecho, el Prof. Aníbal Luis Barbagelata en el Liceo Joaquín Suárez No. 7, en Educación Cívica y Democrática, la Moral -yo ahora digo la Ética y no es lo mismo, pero a los efectos de la exposición las usamos como sinónimos- no son círculos concéntricos, no coinciden, pero sí se superponen parcialmente.

Así, es evidente que un área en la cual se superponen, claramente es el Derecho Penal. El Derecho Penal en general reprime comportamientos que la sociedad reprocha éticamente, pero repito lo que decía al principio: me preocupan más aquellas cosas que no están en el Código Penal y están instaladas en la vida de todos los días.

Por eso, tengo convicción de que el tema de la desinformación es un capítulo sobre el cual deberíamos trabajar más y que la JUTEP debería abordar como una línea específica de trabajo para prevenir y, en su caso, reprimir las nuevas manifestaciones de corrupción que ella ambienta.

### Sobre la transparencia

La transparencia es mucho más que la publicidad. Siempre se ha dicho que la actuación administrativa debe ser pública, lo quiere decir que debe estar expuesta al control de todos los ciudadanos. La transparencia implica dar un paso más. Si un ordenador competente dicta un acto administrativo de adjudicación y después lo publica, procede muy bien pero la transparencia exige que el ordenador competente cuando delibera, fundamenta, y decide, actúe como si estuviere detrás de un cristal limpio y se pudiera ver qué es lo que está haciendo, qué es lo que está deliberando antes de que lo publique porque la publicación siempre es ex post, y la transparencia es dejarse ver entre tanto.

Significa que la transparencia no es un mero concepto vulgar en el uso de la población, sino que la transparencia es una regla de Derecho porque es un Principio General de Derecho.

El Código de lo Contencioso Administrativo aprobado por la Ley N° 20.333 de 11 de setiembre de 2024 establece en su artículo, 40 literal a) -repitiendo una vieja norma que ya viene desde la década del 60, redactada nada más que por Alberto Ramón Real, y Horacio Cassinelli Muñoz- que "se considera regla de Derecho, todo Principio General o regla constitucional legislativa reglamentaria o contractual". Por lo tanto, los Principios Generales de Derecho son reglas de Derecho, y por lo tanto el Tribunal de lo Contencioso Administrativo frente a un acto administrativo desinformado, o dictado con secretismo, debe anular porque se está violando una regla de Derecho que es el Principio General de transparencia y esto vale para todos los órganos de control y, por supuesto, también para la JUTEP.

La apreciación de la transparencia como premisa mayor del control, es una obligación, es un deber, no es una facultad de los órganos de control, y repito: acá se incluyen todos, no sólo al



Tribunal de lo Contencioso, al Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral, la JUTEP y todos los órganos de control.

La importancia de este Principio General de Derecho de la transparencia puede ser apreciada en su triple dimensión jurídica, ética y tecnológica.

Desde su dimensión jurídica su relevancia deriva justamente de ser regla de Derecho en tanto Principio General y fuente principal del ordenamiento jurídico: cuando hablamos de Principios, connotamos inmediatamente dos ideas: es principio porque está antes que el resto del Derecho positivo y, además, es principal porque, en términos de la enseñanza de Horacio Cassinelli Muñoz, tiene un valor y fuerza superiores y por lo tanto no es una petición de principios, no es un gesto novedoso sino que es una obligación aplicarla por el juez y el administrador.

Así surge claramente de la Ley N° 17.060, de Lucha contra la Corrupción, está expresada en la Ley N° 19.121 del Estatuto del funcionario del Poder Ejecutivo, aparece incluida en el TOCAF y la Ley N° 18.381 de Acceso a la Información Pública parte en el artículo 1° de señalarla como el "foco iluminador" (como le gustaba decir a Barbé Pérez) de todo su articulado en orden a su cabal y amplia aplicación. Es que los Principios Generales de Derecho -como ya enseñaba Hauriou- valen per se, no necesitan estar escritos, pero qué bueno que el legislador los explicita porque facilita pedagógicamente la aplicación por los órganos y funcionarios encargados de hacerlo.

Además, en el mundo en el que vivimos la transparencia es mucho más fácil porque disponemos de medios técnicos que hacen posible que se conozca el actuar de las distintas administraciones públicas mientras ese actuar se va desarrollando y no ex post. Y esto no es neutro, que la transparencia tenga esa dimensión tecnológica no es neutro, sino que produce una multi funcionalidad en términos de la calidad democrática o de la calidad del Estado de Derecho.

Todo ello eso potencia desde la perspectiva de la dimensión ética del principio de transparencia, sobre el que volveré enseguida.

A partir de la triple dimensión jurídica, tecnológica y ética de la transparencia, es posible advertir su multifuncionalidad.

En primer lugar, porque vitaliza la buena administración, que también es un Principio General de Derecho del cual derivan múltiples consecuencias. En la Unión Europea hoy se habla hasta por demás de la buena administración, que también tiene una connotación ética bien importante, porque cuando decimos que algo es bueno o malo, no lo estamos calificando desde el punto de vista del Derecho, sino que lo estamos calificando desde el punto de vista de su ser bueno, o malo, en términos éticos.

La buena administración en sí misma es una regla de Derecho que encierra un componente ético fundamental y si es un Principio General de Derecho, al igual que la transparencia, la buena administración genera para la Administración el deber de ser buena, y para nosotros, los habitantes, el derecho a exigir que sea buena.

Ahora bien, ese deber y ese derecho, no son verdad si no hay un control verdadero. Y cuando hablo de control verdadero me estoy refiriendo no a leyes, porque quizás una característica de la uruguayez, es la vertiginosa multiplicación de leyes que luego no permean a la vida ciudadana, lo que implica vivenciarlas, ponerlas en práctica y llevarlas al mundo de la vida cotidiana a esas leyes.

Ciertamente, una Administración opaca no es buena, el secretismo nunca es bueno; el secretismo, el ocultamiento, es indiscutiblemente fuente de corrupción, de la grande, de la chica o de la mediana. Pero el buen funcionario que no tiene nada que ocultar y, por tanto, debe actuar con transparencia.

En segundo lugar, la transparencia potencia el control social. Nosotros cuando hablamos de control muchas veces pensamos en el control del Poder Ejecutivo, del Tribunal de Cuentas, de la Justicia, de la JUTEP, ¿y el pueblo? El pueblo quiere saber de qué se trata, como dijeron los héroes en la Plaza de Mayo. El pueblo quiere saber de qué se trata, entonces el control social es fundamental. La JUTEP es un instrumento del control social en términos de que se lo impone expresamente la Ley N° 17.060, que dedica tres artículos bajo el título "Control Social" y lo ratifica su Ley orgánica en el artículo 4º, numeral 5º.

En tercer lugar, la transparencia tiene la virtud o la función del fortalecimiento institucional porque primero mejora la calidad democrática. Todos nos damos cuenta que la calidad del Estado de Derecho descae cuando se actúa con secretismo, cuando no funcionan los órganos de control, cuando se ahorca a los medios de control. Porque a los medios de control no se los calla solamente destituyéndolos o interviniéndolos, también se los ahoga presupuestalmente, o de otras maneras. A veces esto se hace muy solapadamente para que no se advierta por la sociedad y, por eso, también la importancia de vitalizar el control social, porque en definitiva es la sociedad la que debe exigir a sus representantes lo que debe exigir.

Ese fortalecimiento institucional además se traduce en una mejora de la gestión pública, amplía las posibilidades de la participación ciudadana.

El Plan de Gobierno Abierto que aprobó el Gobierno va en esta línea, pero hay que encarnarlo; ninguno de nosotros desayuna con el Plan de Gobierno Abierto. Es más, me gustaría saber cuántos de nosotros lo leímos completo ¿Qué es lo que está faltando? Lo que está faltando es pasar del papel a la vida, y esto necesita capacitación, necesita endoculturación y necesita educación desde los primeros niveles de la enseñanza institucional.

Además, el artículo 76 de la Ley N° 19.355 apunta a romper con la brecha tecnológica, es decir, a que el contacto tecnológico entre ciudadano y Administración sea verdad para todos y no solamente para quienes disponen de los medios tecnológicos necesarios.

En cuarto lugar, la transparencia apareja facilitación del acceso y aquí importa tanto la transparencia activa (que supone que las Administraciones Públicas pongan a disposición su información relevante) como la transparencia pasiva (que implica responder a los requerimientos ciudadanos). Ambas requieren capacitar a los funcionarios, que muchas veces no tienen claro cómo su trabajo se engarza en una cadena que tiene que ver con el trabajo que hizo otro antes y con el que va a hacer otro después y que termina en determinado producto.

La capacitación implica que cada quien sepa qué es lo que está haciendo, la importancia de lo que está haciendo, y cómo lo que está haciendo se involucra en un procedimiento administrativo que conduce a algo que va a terminar en una decisión, en un gasto, en una compra, en una obra, o en lo que corresponda.

En este período de gobierno que termina, hubo una iniciativa legislativa para limitar la transparencia pasiva, porque a las Oficinas Públicas les molestan que le pregunten. Yo reconozco que a veces hay que disponer de personal y de medios para contestar la multiplicidad de pedidos de acceso a la información, pero cuál es el mal menor. ¿Es efectivamente una solución limitar el acceso a la información pública?, ¿No sería mejor ser absolutamente transparentes y entonces no se recibirían tantos pedidos de acceso? Es que, si se conoce la información, no es necesario pedirla. Y esto tiene que ver con lo del principio que es la situación que se crea cuando campea la desinformación.

Además, transparencia y buena administración jerarquizan la servicialidad administrativa. Y siempre hay que tener presente que administrar quiere decir etimológicamente servir. Las Administraciones son servicios, muchos se llaman Servicios, Administración de los Servicios de Salud del Estado, por ejemplo.

Administrar es servir y si una Administración no sirve, no sirve. Y si una Administración no sirve, o la transformo o la cierro, pero no tiene sentido que esté, porque no está cumpliendo con su finalidad esencial que es servir. ¿Servir a quién? ¿Al Partido?, la Constitución dice que no, ¿Al Gobierno?, la Constitución dice que no. El servir se debe a la ciudadanía que se organizó en el Estado para ser servida, entonces cuando alguno de nosotros va a un mostrador, el que está del otro lado del mostrador tiene que tener en cuenta que el que viene es el patrón, el habitante es el patrón. La servicialidad que es inherente a la condición de la Administración y que tiene como contrapartida el destacar que el centro del sistema es la persona; es cada uno de nosotros en virtud de la dignidad humana que cada uno ostenta, sea hombre o mujer, grande o chico, participe de una ideología o de otra, tenga un comportamiento sexual u otro, sea un trabajador sea un patrono, sea discapacitado o ultra capacitado. Todos participamos de una dignidad eminente que es idéntica en todos y de ella derivan todos los derechos; derechos que tenemos entre otros, frente a ese aparato que nos dimos que es el Estado y sus Administraciones para que nos sirvan.

Servicialidad administrativa y dignidad de la persona humana como centro, son como los dos términos o las dos caras de una misma moneda.

### Sobre la Ética Pública

La Ética Pública desde hace años experimenta en nuestro país un proceso que yo ya he calificado hace ya más de veinte años, de juridización porque justamente para que todos sepan cuáles son las reglas éticas, se incorporan en normas jurídicas.

Esto no está mal, también cumple una función pedagógica, pero no quiere decir que toda la Ética Pública esté juridizada, y además es muy importante, sobre todo, en órganos de control como la JUTEP porque no puede ser un Tribunal de Inquisición, no puede responder a lo que subjetivamente le parece bien o mal a sus Directores o a los Partidos Políticos que pusieron a los Directores sino a lo que objetivamente está bien o mal acorde a la Etica, que es una ciencia.

Es preciso tener en cuenta que la Ética en sí, es una ciencia distinta al Derecho, pero es bueno que el Derecho incorpore normas éticas porque normalmente es más común que estemos formados en Derecho que en Ética.

Además, la Ética no es relativa, la Ética no es de modas, la Ética justamente se distingue de la estética en que a lo que a mí me puede gustar, a otro puede no gustarle. Pero lo que está bien o lo que está mal, no es relativo. Y a veces, y esa es otra característica de la uruguayez, tendemos a la relativización: el "dale que va", y "qué vas a hacer, por esta vez.....". Todas estas son expresiones de relativización de lo que no es relativizable porque además la apreciación de una conducta desde el punto de vista ético, supone apreciarla en su objeto, en su fin, y en sus circunstancias, que el controlante tiene que tener en cuenta porque no basta la buena intención, el fin de no justifica los medios y, por tanto, no hagas a los demás lo que no quieres que hagan contigo, a la vez que trata a los otros como te gustaría ser tratado. Estos son pilares fundamentales de la Ética.

Si bien la juridización de la Ética Pública hoy es una realidad, teóricamente no es necesaria, pero desde el punto de vista práctico es altamente conveniente, incluso en términos de organización de la capacitación del personal servicial; de lo que nosotros en la Constitución nosotros llamamos Funcionarios Públicos, y que quizás con mejor expresión de su realidad la Constitución brasileña llama "Servidores Públicos", precisamente porque están al servicio del pueblo al que se deben.

El Código de Conducta Ética en la Función Pública aprobado por la Ley Nº 19.283 es muy claro en cuanto a su ámbito, no son solamente los funcionarios públicos como tales, sino muchos otros que cumplen función pública o afines en el denominado parasistema administrativo, que muchas veces traduce en su organización formas veladas de corrupción porque qué es lo que justifica la huida o la fuga del Derecho Administrativo. Muchas veces es la procura de huir del control del Tribunal de Cuentas, de x, y, z; y además del control presupuestal para poderle pagar a quien dé la gana lo que dé la gana y no lo que las normas presupuestales establezcan.

Luego este Código habla de Principios y Valores sustentados en la idea de que los funcionarios que animan a las estructuras administrativas están para servir (servicialidad) con objetividad (no inquisición, no subjetividad) al interés general (el bien común) que está por encima de los intereses particulares.

Casi todos los Principios encierran Valores, pero hay Valores que no están incorporados a Principios. La amistad es un valor, pero no es un principio; lamentablemente la Ley habla de Principios y Valores y no distingue muy adecuadamente pero sí queda claro que es distinto a Reglas de Actuación, porque después en otra parte el Código se ocupa de los deberes y obligaciones, de las prohibiciones e incompatibilidades y demás reglas que hacen al desempeño de cada funcionario, cualquiera sea su jerarquía.

#### Colofón

¿Cómo terminar esta reflexión sobre tres cosas que parecen tan distintas pero que están tan vinculadas entre sí: desinformación, transparencia y Ética pública?

Creo que quizás esto último, la Ética Pública puede ser como el manto que abrace a todos estos conceptos, no desde lo que a cada uno le parece sino desde lo que debe ser, vitalizando efectivamente la Ética Pública, desde la cotidianeidad.

Del narcotraficante se va a ocupar el Ministerio Público y la Justicia Penal, del ciudadano de a pie, del trabajador, del empresario, del funcionario público, se tienen que ocupar los órganos de control competentes. Pero no sería correcto pensar en el control sólo en perspectiva de represión sino también en perspectiva de concientizar que cada uno está obligado a servir con objetividad al interés general, es decir a servir bien. Y servir bien quiere decir que cada uno de nosotros cuando se va a dormir, esté tranquilo en el sentido de que hizo ese día lo que tenía que hacer, un trabajo bien hecho.

Y el trabajo bien hecho requiere virtudes, y las virtudes no son innatas; nadie nace virtuoso. Esto ya lo decía Aristóteles: las virtudes son hábitos repetitivos buenos. Y un hábito supone repetición; nadie nace ordenado, nadie nace optimista, nadie nace labrador, etc. Eso hay que construirlo día a día y además hay que tener presente que cada virtud tiene como contrapartida un vicio; frente al orden está el desorden, frente al optimismo el pesimismo, frente al esfuerzo, la haraganería, etc.

Por tanto, no hay que despreciar en la capacitación la importancia en el servidor público de trabajar bien y para trabajar bien hay que cultivar las virtudes; todas, todas a la vez. Y eso nos cuesta, porque todo aquello que implica luchar contra nosotros mismos aunque sea con el propósito de mejorar, cuesta, y lo que cuesta, en general, tratamos de no hacerlo, pero si queremos de verdad luchar contra la corrupción, no en el discurso, no en la sede del Parlamento, sino en la vida diaria, y todos los días, tenemos que empezar a romper con cadenas que nos atan a todos, graficadas en expresiones que todos hemos escuchado (ojalá que no las hayamos dicho): "otro día más para la jubilación", "siempre se hizo así", "no te metas", que son típicas expresiones de corrupción pequeña, pero que es la que termina pudriendo a la sociedad.

Muchas gracias.

## **Ética en la Inteligencia Artificial**

---

Buen día a todas y todos, para mí siempre es un honor estar presente en esta celebración, por lo cual agradezco al Directorio de JUTEP una vez más la invitación, y me siento especialmente honrado de compartir esta mesa con prestigiosos colegas.

En el año 10 después de Cristo en pleno Imperio Romano, un historiador, Tito Livio, decía: “En el amanecer sombrío de nuestros días modernos, no podemos soportar nuestra inmoralidad ni enfrentar los remedios necesarios para curarla”.

Muchos filósofos e historiadores dicen hoy que ese tipo de predicciones son fácilmente aplicables a nuestra actualidad, porque consideran que hay un marcado ascenso de las inmoralidades en general, especialmente ante la carencia de bondad, honestidad, decencia, solidaridad.

No hace mucho tiempo salieron algunos resultados de una encuesta que realizaron las Universidades de Harvard y Columbia, que abarcó un período de tiempo entre 1956 y 2018, en donde se pesquisó, casi doce millones de personas de distintas franjas etarias en más de sesenta países, en donde una inmensa mayoría opinó que había un pronunciado declive moral en nuestras sociedades contemporáneas.

Dentro de los items preguntados en esta encuesta, estaba justamente el que indagaba sobre si los avances tecnológicos en general estaban acompañados por un avance de valores, de moral, y de ética. Y obviamente, la respuesta fue negativa, pues la inmensa mayoría opinó que había una marcada desproporción entre el avance tecnológico y el avance moral de la sociedad.

En principio, esas percepciones trajeron como consecuencia posturas que podríamos calificar de apocalípticas, las que se fue extendiendo hasta nuestros tiempos, porque la gente mayormente entiende que hemos caído en una desvirtuación de los valores básicos generales. Y cuando se ligaba esto con el avance tecnológico, pues empezaron a formularse dilemas éticos, cuya solución o respuesta no resultaba muy fácil discernir.

Cierto es que no todos coinciden en que se está frente a una crisis de valores a nivel mundial, pero me arriesgo a creer que si hoy indagamos respecto a si la moralidad ha transitado un camino proporcional al avance tecnológico, todos tenemos seguramente una opinión similar a la de la encuesta.

Hoy se habla mucho sobre la ética de las máquinas, porque dentro de este avance tecnológico, la vedette, como todos ustedes saben, es la inteligencia artificial, que ha venido avanzando a niveles realmente mayúsculos. Como prolongación de la actividad humana, la inteligencia

artificial funciona a través de algoritmos, esto es un conjunto ordenado y sistemático de datos que la máquina recoge, que le permiten solucionar problemas y emitir juicios en muy breves espacios de segundos.

El término "inteligencia artificial" (IA) se le atribuye a Alan Turing, que allá por 1950 en los albores de la llamada guerra fría, empezó a investigar con la ilusión de emular a través de una máquina el funcionamiento del cerebro humano. Turing, matemático británico, ya era famoso por haber descifrado el "código enigma" utilizado por los nazis en la Segunda Guerra Mundial, permitiendo con ello, en gran medida, el final de la guerra.

Pero vayamos a este avance exponencial en el desarrollo de la inteligencia artificial al que hoy asistimos. Los expertos dicen que reconocer tres fases de avance de la inteligencia artificial.

La primera etapa es la que estamos dejando atrás, que se caracterizó por ser una inteligencia artificial llamada "estrecha" o IAE por sus siglas en inglés, y que estaba enfocada básicamente en una sola tarea, en un trabajo pre definido por su operador, recogiendo datos que ya estaban en páginas de internet. La máquina básicamente se "entrena" a través de esos datos, tomándolos tanto de páginas serias como de páginas no serias, sin seleccionarlos.

Esa etapa estuvo dominada por el chat GPT4 que estuvo accesible para todos nuestros celulares, y que fue actualizándose a través del llamado Open O1. La empresa Open es la empresa dueña, creadora del chat, que invierte millones de dólares anuales para el desarrollo de estas herramientas, al punto de que ya está accesible el chat GPT 5 que según los expertos es el mayor transformador de procesamiento de lenguaje natural que puede reproducir con precisión y eficacia patrones de pensamiento y argumentación humanos.

La segunda fase de avance es la inteligencia artificial general o IAG por las siglas en inglés. Esta segunda fase se alcanza cuando la inteligencia artificial empieza a tener facultades cognitivas similares a la humana y es capaz de llevar a cabo cualquier tipo de tarea intelectual que se le pida. Respecto de esta segunda fase, el propio creador del chat GPT Samuel Almand, en una comparecencia muy reciente al Congreso de los Estados Unidos, habló de sus ventajas, pero se cuidó de señalar los riesgos importantes que implica esta herramienta para la humanidad, si no se la regula lo más pronto posible. En buen romance: es como pretender vender un Ferrari pero alertando que si no lo conduces con cuidado puedes perder la vida en un accidente.

La tercera etapa del avance es la llamada super inteligencia artificial o ASI por sus siglas en inglés. Los expertos sostienen que en esta fase la IA no sólo igualará las facultades cognitivas e intelectuales de cualquier ser humano, sino que las va a superar. Esos mismos expertos dicen que el gran problema aquí es que la IA pueda superar barreras biológicas, al punto de que algunos predicen que para el año 2030 la humanidad va a alcanzar la inmortalidad, a través de nanos robots que regenerarían nuestras células y que, colocados en el cuerpo humano, permitirían alargar indefinidamente la vida.

Los autores que yo llamo "apocalípticos" presentan todo esto como un gran riesgo para la humanidad, señalando que seguramente no nos vamos a dar cuenta, en algún momento no muy lejano, de estar gobernados por las máquinas. No son pocos los autores y científicos con esta visión negativista sobre el avance de la IA, comparándolo con la aparición de la energía

nuclear en cuanto a que ambos progresos ponen en riesgo a la humanidad tal como la conocemos. Incluso dicen que la IA es mucho más democrática que la fusión del átomo, porque hoy para construir una bomba atómica se necesitan materiales cuya venta está controlada en todo el mundo; sin embargo, para lograr acceder a cualquiera de las cosas que hoy permite la IA, basta contar con un procesador potente y un operador avezado en la materia.

Lo que llama la atención y no se puede negar, es que estas visiones apocalípticas no provienen sino de científicos, pensadores, filósofos. Algunos de ellos recurren a la industria cinematográfica para fundar sus posturas, y dicen por ejemplo que Hollywood ya se encargó de avisarnos de estas profecías. Citan por ejemplo el film 2001 Odisea del Espacio, que allá por el año 1968 pronosticaba que las máquinas podían dominar al hombre; o el film Terminator del año 1984, donde un robot venía del futuro a matar a la mujer que sería la madre de quien salvaría a la raza humana del dominio de las máquinas; o el film Avanger la Era de Ultrón, estrenada en el año 2015 y donde veíamos a una máquina autocrática pretendiendo dominar la Tierra.

Yo prefiero de todas estas cosas una visión mucho más positiva, mucho más esperanzadora, pero que para nada significa quedarnos de brazos cruzados, sino volvernos necesariamente proactivos para impedir que aquellas cosas que pueden ser negativas o resultar un riesgo en el avance de la inteligencia artificial, terminen -por nuestra acción u omisión- "explotándonos en la cara" como se dice vulgarmente.

Con este panorama sombrío los autores han marcado algunos dilemas éticos que yo les voy a mencionar muy rápidamente.

- a) Si bien la IA a través de la automatización de los procesos, promete una mayor economía y eficiencia, ¿cuál será el impacto laboral en el desplazamiento de los puestos de trabajo.
- b) ¿Qué riesgos corre nuestra privacidad y seguridad en materia de datos personales cuando son manejados no por una inteligencia humana, sino por una inteligencia artificial, una máquina?
- c) Si los algoritmos son alcanzados por los prejuicios y sesgos existentes en la vida real, ¿se puede perpetuar esos sesgos o prejuicios en los resultados emanados de la inteligencia artificial? ¿Cómo influye eso en materia de equidad y justicia?
- d) ¿Existe un riesgo cierto de que la inteligencia artificial alcance un nivel de autonomía tal que sustituya totalmente al ser humano; o podemos descansar de que la dependencia humana en el manejo de estas máquinas será una limitación natural?
- e) ¿Hasta qué grado será tolerable, en la toma de decisiones por parte de sistemas de inteligencia artificial, cuando esas decisiones se relacionen con áreas críticas como seguridad, salud, justicia?
- f) En materia de derechos de autor, ¿quién es el autor del producto que emana de la inteligencia artificial?



- g) ¿De cuál operador es la responsabilidad por el mal uso de la inteligencia de artificial?;
- h) ¿Debe exigirse a todos los operadores una rendición de cuentas? Y dentro de este dilema, lo más importante: ¿hay que regular legalmente el uso de la IA?

Voy a dar dos ejemplos muy claros de lo que son avances y, a la vez, riesgos del uso de la IA. En el área de la Medicina, en materia de biología molecular, la humanidad avanzó cincuenta años gracias a la inteligencia artificial, y todos conocemos que hoy basta subir a un programa una radiografía para que la inteligencia artificial brinde un diagnóstico preciso de la enfermedad que puede padecer el paciente.

Obviamente también sabemos que hay robots que realizan operaciones de alto riesgo con mínimo peligro para el paciente. Sin embargo, yo recuerdo que en un Congreso de Ética Médica que organizó hace muchos años la JUTEP y que fue un verdadero éxito, en el Taller que me tocó moderar a mí, recuerdo que un médico del interior, del Departamento de Paysandú, trajo dos temas a colación, dos criterios que rozaban el aspecto ético, y que él había tenido que vivir en su Departamento. Y quiero trasladar esos ejemplos a la actualidad, frente al avance de la IA.

Este médico citaba el criterio de la utilidad social, esto es darle preminencia a la atención médica al joven frente a la persona de más edad, por ser el joven más útil a la sociedad. Y contó precisamente algo que le había ocurrido en su policlínica, donde había tenido que optar por ventilar a un muchacho que había sufrido un paro cardíaco jugando al fútbol, cuando concomitantemente tenía a una anciana con un cuadro cardíaco severo.

Otro criterio que se mencionó en ese Congreso, es el de la contribución económica, cuando realmente en Medicina se le da prioridad a quien contribuye en mayor grado al sostenimiento del sistema.

Entonces, recuerdo esto porque, si hoy en materia de sesgos se cargaran estos criterios a la inteligencia artificial, seguramente los resultados obtenidos estarán contaminados de estos prejuicios y de estos sesgos, y ya no va a ser el hombre quien elige a quien atender, sino que va a ser una máquina que nos va a decir a quién debemos priorizar en una atención médica.

El otro tema es el de la Abogacía, hay quienes acá sí tienen opiniones muy apocalípticas, que pronostican que la profesión va a desaparecer como tal en muy poco tiempo. Hoy hay que recordar que la inteligencia artificial puede procesar en un segundo diez mil páginas de cualquier documento, para que tengan una noción de lo que se puede ahorrar de horas hombre; y dentro de ese segundo también puede el programa señalar qué aspectos de interés pueden servirle al operador y cuáles no. Por citar un ejemplo, hay un sistema canadiense que tal vez algunos conocen, denominado Ross, patrocinado por la Universidad de Toronto, que en muy breves minutos puede darnos la normativa, la jurisprudencia y la doctrina aplicable a un caso concreto.

Los expertos predicen que en 2030 estaremos frente a la posibilidad de un acceso gratuito a la Justicia y señalan que, si hoy un sistema como el canadiense permite predecir en un 79% el resultado de un litigio, seguramente para el 2030 se irá a alcanzar el 100% en materia de predicciones.

El mayor problema en esta materia es el mismo que tenemos en otras actividades: si bien la decisión al día de hoy descansa en un ser humano, es decir que es el Juez de la causa el que decide, nunca podemos estar seguros si la IA que le sirve al Juez como herramienta o soporte básico a la hora de dictar una sentencia, haya tomado de los casos testigos todos aquellos sesgos de los cuales dichos casos están contaminados. O sea, normalmente, los casos testigos que ya pre-existían y sirven de soporte jurisprudencial, tienen sesgos que no corrige la inteligencia artificial y que pueden perfectamente integrar un fallo, aun cuando sea un ser humano el que lo dicte.

Hay un ejemplo muy claro que es el sistema que hoy existe en Estados Unidos, denominado COMPASS, que se usa en materia criminal. Este sistema opera de la siguiente forma: cuando se detiene a una persona, se le pide que llene un formulario, el formulario se integra al sistema, y el sistema le dice al operador si esa persona puede esperar en libertad o no la decisión sobre su eventual responsabilidad penal. Pero no sólo le dice eso, también le dice si es posible que esa persona pueda volver a reincidir en la misma etiología del delito por la cual está investigado o en una distinta.

Cuando se auditó por primera vez este sistema, las conclusiones fueron nefastas, pues se dieron cuenta que el sistema favorece a las personas de raza blanca y había un claro prejuicio en contra de los afro descendientes, lo que en buen romance indica que el sistema fue entrenado con claros sesgos racistas.

Hace muy pocos días leí en un artículo sobre una empresa japonesa llamada SACANA, que utiliza una inteligencia artificial que se denomina "El Cientista", la cual sufrió un pequeño sismo ético cuando la máquina, autónomamente, modificó su código de seguridad. En efecto, la máquina en cuestión está pensada para realizar investigaciones científicas y emitir después determinados principios, normas, o leyes, todo eso dentro de un determinado tiempo. Pues bien, en este caso la máquina vulneró los códigos de seguridad, y se auto impuso un tiempo indefinido para arribar a una determinada conclusión.

Obviamente los encargados y responsables de la máquina salieron a decir que realmente no había habido ningún sismo ético, que lo único que hizo la máquina fue realizar una corrección en el tiempo de integración de los datos que se integraron al algoritmo, pero obviamente nadie les creyó. Realmente fue un sismo ético porque por primera vez, una máquina toma decisiones autónomas con independencia de sus operadores.

De más está decir que los científicos que están atrás de estas máquinas tienen como norte super dotar al algoritmo, no quieren su limitación, y buscan siempre explicaciones para todas estas fugas éticas que tienen los sistemas.

Gonzalo Génova, Profesor Emérito de Filosofía y Ética de la Universidad Carlos III de Madrid, al referirse a la inteligencia artificial, dice que hay que estar sumamente alerta porque al día de hoy es absolutamente imposible predecir con certeza el resultado de las instrucciones que le damos a los algoritmos, por la complejidad de los mismos.

Si bien destaca que hoy las máquinas no pueden emitir un juicio ético, sí se inclina como vamos a ver un poco más adelante, en que los juicios éticos tienen que estar en las personas

que operan las máquinas; deben ser los operadores de los sistemas quienes deben respetar los principios éticos, pues aún a las máquinas no se les puede enseñar Ética.

Obviamente alerta como otros protagonistas de esta historia, sobre los sesgos y entiende que los prejuicios de la vida real, si son cargados al algoritmo, vamos a tener siempre resultados que van a estar afines a esos sesgos.

Una de las cosas importantes que sostiene Génova es que la inteligencia artificial tiene cierta “voracidad” desde que invade las habilidades humanas opacándolas. Cita un ejemplo puntual: en un estudio que se hizo en España se constató el desuso de facultades cognitivas producto del uso de la inteligencia artificial, lo que ha llevado a que por ejemplo los jóvenes no sepan ubicarse cardinalmente porque están acostumbrados a manejar GPS, siendo incapaces de leer un mapa. Por eso sostiene que, a través de la IA, hay que potenciar las habilidades humanas, y no opacarlas.

Génova menciona tres pilares que según él debe tener el avance de la inteligencia artificial: la educación cívica del personal que usa la inteligencia artificial, la existencia necesaria de un marco regulatorio, y la atribución de responsabilidad a los operadores de los sistemas. Señala que el avance de la inteligencia artificial tiene los mismos dilemas éticos, las mismas ventajas y los mismos peligros que cualquier avance tecnológico, pero elevados a la décima potencia. Hay que tener mucho cuidado, sostiene, en el manejo responsable de la herramienta.

Francesca Rossi, Directora de Ética de IBM, propone analizar con cuidado los algoritmos y el contenido con que se alimenta a las máquinas, porque si bien no podemos enseñar ética a las máquinas, sí les debemos exigir a los operadores el respeto a ciertos principios universales incontrastables, como ser el de justicia, transparencia, privacidad y seguridad de nuestros datos personales, abogando por una necesaria regulación legal.

Y precisamente, cuando hablamos de regulación legal que es uno de los grandes dilemas en el avance de la IA, yo ya quiero adelantarles que estoy a favor de regular. Les voy a mencionar tres etapas de la regulación que hoy existen en el mundo.

A) En el mes de noviembre de 2021 y previendo ya los problemas éticos que podría traer la inteligencia artificial, la UNESCO emitió una primera Recomendación que fue aceptada por ciento noventa y seis países. Esa Recomendación tenía cinco tópicos, cinco principios rectores en materia de ética: protección de los Derechos Humanos, dignidad humana, transparencia y equidad, supervisión humana constante, regulación y responsabilidad.

En la Exposición de Motivos de esta Recomendación, la UNESCO decía, voy a citar textual: “Resulta imperioso que los Estados adopten acciones priorizando el uso responsable de la inteligencia artificial sobre la base de obtener de ella objetivos legítimos, evitando la vulnerabilidad de los sistemas a través de auditorías constantes que garanticen la protección de datos personales, la transparencia en el uso de dicha herramienta y la atribución de responsabilidad ética a los operadores de la misma, sean personas físicas o jurídicas”. Nada más claro y contundente que esta frase.

B) En el mes de febrero de 2024, se realizó el Primer Foro Mundial sobre Ética en el uso de la inteligencia artificial, evento patrocinado por UNESCO, donde se dijo que, en pocas actividades humanas, se necesita tanto de una brújula ética como en materia de inteligencia artificial. Obviamente se habló sobre los sesgos, el peligro de los sesgos, y se dijo que si no son controlados son capaces de reproducir las desigualdades y discriminaciones del mundo real, violentando los derechos humanos de primera generación.

C) Recientemente, el Parlamento europeo, dictó una Ley que regulará con Principios Éticos la inteligencia artificial, la que se va a poner en vigencia recién en el año 2026, y acá se alerta por algunos que cuando se ponga en vigencia esta ley, por el avance totalmente desmesurado de la inteligencia artificial, muchas de las normas que aquella contiene estarán en desuso. Lo que nadie puede negar es que Europa ha sido pionera en dictar la primera Ley regulando la inteligencia artificial.

El alcance subjetivo de la Ley es muy amplio, alcanza a los proveedores, a los importadores, a los distribuidores, hasta al usuario final; y en materia de alcance objetivo la Ley se circunscribe obviamente al continente europeo. Allí ya se vislumbra un problema que los analistas perciben y que es de orden geopolítico: al ser Europa la primera y única regulación legal de la inteligencia artificial, los dos grandes monstruos que quedan sin regulación, son Estados Unidos y China, quienes superarán a los europeos en esta carrera tecnológica. Estados Unidos, que invierte trillones de millones de dólares para soportar la investigación de la inteligencia artificial, y China que copia y copia muy bien todos los avances, vendiendo sus programas a un precio infinitamente menor a su mayor competidor, van a terminar dominando el mundo de la inteligencia artificial, desde que está lejos de sus pretensiones ponerle un marco regulatorio al tema.

No obstante, hay que marcar que esta Ley del Parlamento europeo no alcanza ni a la investigación científica ni al desarrollo de la inteligencia artificial, lo que permite suponer que ello no los afectaría en esta carrera por el desarrollo de la IA.

La Ley se estructura a través de un sistema de riesgos, considerando por ejemplo como riesgo inaceptable a aquel que viola los derechos humanos, que está prohibido; supone casos de riesgo alto para los cuales exige determinado control y obligaciones por el operador, un riesgo medio que prevé también ciertas obligaciones como transparencia y rendición de cuentas, y finalmente un riesgo mínimo que no tiene limitaciones en el uso e investigación de la inteligencia artificial.

Desde el punto de vista sancionatorio prevé sanciones muy grandes, hasta treinta y siete millones de euros y/o el siete por ciento de la facturación anual del individuo o empresa infractora.

Volviendo a algunos autores, a mí me gusta mucho leer a la Profesora Emérita de Ética y Filosofía de la Universidad de Valencia, Adela Cortina, que ante el desarrollo exponencial de la inteligencia artificial prefiere mantener una postura un poco menos rígida que la mayoría de los autores, menos apocalíptica diría yo, sosteniendo que no es utópico pensar que a la brevedad podamos los seres humanos y las máquinas interactuar sin mayores problemas, pero para eso, hay que evitar los sesgos y prejuicios al entrenar a la inteligencia artificial. Aboga

para que se recurra a los Principios Éticos Universales previamente pautados desde el punto de vista legal.

Para legislar en esta materia dice Cortina, que somos nosotros, los seres morales, quienes debemos ante los avances de la inteligencia artificial, preguntarnos para qué, cuál es el objetivo, a quién beneficia y a quién perjudica, porque solamente así se puede éticamente contemplar este avance de la herramienta.

Esta Profesora es que propone legalizar principios que en su momento y para la robótica, propuso Isaac Asimov: ninguna máquina puede perjudicar al ser humano, las máquinas deben obedecer al ser humano salvo que ello se contradiga con el primer postulado, y por último la máquina debe preservar su existencia, salvo que ello contravenga los dos postulados anteriores.

Lo más importante en mi opinión de la postura de Cortina y que coincide con lo dicho por su colega Gonzalo Génova, es que propone una educación ética orientada a las personas que son encargadas de operar los sistemas y surtir de datos a las máquinas que manejan la inteligencia artificial. Para ella es imprescindible concientizar a los sistemas políticos de la importancia de educar para la Ética; hay que bregar por una Ética verdadera que conjugue el discurso con el actuar coherente. Se inclina por una educación que no sea aséptica, sino que se impregne a los jóvenes desde tempranas edades, de principios universales como ser los de libertad, igualdad, solidaridad y respeto mutuo, valores incuestionables que cualquier sociedad debe apreciar como tal.

Para educar sobre valores -dice Cortina- uno tiene que estar convencido de ellos, tiene que poder argumentar frente al alumno por qué cada uno de estos principios universales son importantes y poder defender de esa forma el discurso.

Entonces, ¿qué hacer frente a todas estas manifestaciones, algunas apocalípticas, algunas más esperanzadoras, sobre el avance desmesurado de la IA? Bueno, voy a mencionar algunos principios que, humildemente, me parece deben ser abordados frente al progreso de la IA y que me parece pueden servir de orientación para abordar el fenómeno.

1. Respeto a la autonomía humana, esto es, que sea una persona física o jurídica la que esté en el control de estos sistemas.
2. Responsabilidad y rendición de cuentas, en cuanto a que se puedan auditar los algoritmos y se pueda responsabilizar de su mal uso a las personas físicas o jurídicas que operan estos algoritmos.
3. Seguridad y privacidad en el uso de los datos personales.
4. Evitar los sesgos, y prejuicios de la vida real para que estos no impregnen el sistema.
5. Transparencia y accesibilidad, así como un necesario control social sobre el manejo de estos sistemas y sobre todo la comprensión del ciudadano común sobre cómo funcionan los mismos.
6. Certificación ética por un Comité de Expertos que garanticen al operador del programa que la inteligencia artificial que maneja ha sido evaluada y no merece reproches de orden ético.
7. La educación para la ética desde tempranas edades.

Me quiero referir brevemente a los puntos 6 y 7.

La Certificación Ética por un Comité de Expertos no es un invento mío. Yo he tenido la suerte y el honor de haber charlado mucho con el Dr. Rafael Radi, que seguramente todos conozcan por su participación como Asesor del Poder Ejecutivo en la Pandemia del COVID, que hace muy poco tiempo recibió un galardón como Miembro numerario de la Pontificia Academia Científica del Vaticano, junto a ocho científicos de todo el mundo, y allí cada uno de los galardonados tenía diez minutos para hablar de lo que realmente quisiera, seguramente afín a su especialidad. Nuestro compatriota compartió con uno de los galardonados, el matemático y científico Denis Hassabis. Este señor fue el creador del programa DeepMind que fue vendido por él a la empresa Google, una verdadera autoridad en materia de IA.

En su discurso Hassabis propuso la creación de un Comité Ético que certificara los programas de IA antes que éstos fueran comercializados.

Cuando Radi me comentó esto, como un aporte realmente mayúsculo, enseguida me pareció que tenía algunos reparos. Si como decíamos China hoy vende las herramientas vinculadas a la IA más baratos que su competidor más cercano, sin ninguna regulación obviamente, el único que puede eventualmente tomar esta medida de crear un Comité Ético sería Estados Unidos. Y Estados Unidos que, como dijimos, tiene un presupuesto abultadísimo para el desarrollo de la inteligencia artificial, no creo que esté interesado en crear un Comité de Ética, al que habría que solventar presupuestalmente (lo que encarecería aún más el producto revisado) y seguramente pondría reparos en el progreso de la herramienta.

En cuanto a la educación para la Ética, sintéticamente, quiero decir que nos ubica desde donde tendríamos que encarar el fenómeno, por lo menos desde mi perspectiva.

Y las posturas aristotélicas nos van a decir que hay que recurrir siempre a los mapas o carreteras morales que son aquellos que están impresos en las normas que hoy tenemos, en los Códigos, en las Leyes. Pero yo prefiero una posición más kantiana y recurrir a aquello que dijo la UNESCO, de que lo importante acá es tener una brújula jurídica, una brújula ética que nos diga exactamente cuál es el camino correcto a seguir en esta materia.

La brújula ética, como decía la UNESCO, es en esta materia más importante que en cualquier otra materia. Entonces, para educar en Ética, por un lado, está la capacitación que le podemos a la gente en general y en particular a los que están vinculados con la cosa pública. Y en el caso de los operadores de los sistemas de IA esa educación debería ser multi disciplinaria para que obtengan un amplio abanico de las fortalezas y riesgos de la herramienta.

Pero para mí, para enfrentar el avance tecnológico desde una perspectiva ética, la importancia mayúscula está en la educación en valores desde las edades más tempranas, porque no se nos tiene que escapar que hay que preparar a nuestros jóvenes niños y adolescentes para un mundo tecnológico que hoy no podemos siquiera dimensionar. Está comprobado, y lo he dicho muchas veces en algunas charlas académicas, que entre los 6 y 9 años el niño aprende los valores que lo van a acompañar el resto de su vida. Entonces, aquellos valores que como bien dicen los profesores citados, son incontrastables y de rango universal, como la igualdad, la justicia, la transparencia, la empatía, la solidaridad, entre otros, deben ser parte de la educación ética que le damos a nuestros jóvenes.

Nuestro Constituyente ha sido vanguardista en esta materia porque como todos ustedes saben, en el Artículo 71 de la Constitución de la República, en la Sección II, Derechos, Deberes y Garantías, segundo numeral, se establece que “todas las instituciones docentes se atenderá especialmente la formación del carácter moral y cívico de los alumnos”.

Esta norma constitucional se complementa con el Artículo 3º del Código del Niño y de la Adolescencia, que estipula “el derecho del niño a las medidas especiales de protección que su condición de sujeto en desarrollo exige por parte de la familia, la sociedad y el Estado”.

Entonces es el Estado señores quien debe forjar el temperamento y la personalidad del niño y prepararlo para estos avances. No en vano la palabra Ética proviene del latín Ethos que quiere decir carácter. Nosotros podemos venir al mundo con determinado temperamento, que no elegimos, pero el forjamiento del carácter sí lo podemos elegir y es una labor del Estado no estar ajeno a forjar el carácter de sus ciudadanos a través de normas que reproduzcan estos principios generales, incontrastables, que venimos de mencionar.

Voy a leerles, para terminar, lo que tiene hoy la Universidad de Barcelona proclama desde su Cátedra de Educación en Valores: “Los primeros años de vida de nuestra especie resultan determinantes para que la integración de los sujetos en las sociedades sea adecuada a las normas, costumbres y valores éticos y morales que dichas sociedades postulan como válidos y prioritarios para su propio progreso económico y cultural. Fomentar valores dentro del ámbito educativo, permite formar personas críticas y auto reflexivas, a construir una libertad responsable sin que el Estado esté obligado a otra cosa que difundir aquellos valores que ya están impregnados en normas constitucionales y legales y que enuncian los Derechos, Deberes y Garantías a los que estamos afiliados todos los ciudadanos de un país”.

En definitiva, desde mi humilde posición, brego para que la regulación de la inteligencia artificial se haga, no sé cuándo, si AGESIC lo tiene en su agenda o no, pero seguramente en un país chico como el nuestro, pero que vive mucho de su avance tecnológico, tengamos más pronto que tarde, una regulación legal para el uso de la IA, tomando los ejemplos de Europa, participando de los Talleres de la UNESCO que son importantes, pero sobre todo bregando para que nuestros niños y jóvenes estén debidamente preparados para un futuro tecnológico que avanza a pasos agigantados, estando en el obrar ético nuestras mayores esperanzas para el futuro.

Les agradezco su atención, muchas gracias.

*Magister en Derecho Administrativo Económico por la Universidad de Montevideo, actualmente se desempeña como Juez Letrado Especializado en Violencia basada en Género. Es autor de varios libros y artículos jurídicos relativos al Derecho Administrativo, Derecho Constitucional, Derecho de la Función Pública, Derecho Penal, Derecho de Familia, y sobre Violencia basada en Género.*

## **Artículos 58 y 59 de la Constitución de la República. Una nueva lectura como aporte fundamental al combate de la Corrupción**

---

Buenos días, muchas gracias, simplemente agregar que también soy docente de Derecho Administrativo, que cursé toda la Carrera Docente. Muchas gracias por la presentación.

Comenzar esta disertación con un agradecimiento. Agradecer que estén aquí hoy para poder escuchar lo poco o quizás lo mucho que podamos dejar hoy en cuanto a este tema. Lo mío va a ser más un abordaje jurídico.

Agradecer, agradecer al Directorio de la JUTEP la invitación, me siento muy honrado de estar aquí, y también de escuchar disertaciones que seguramente nos van a dejar mucho y nos van a hacer reflexionar sin duda aún más en cuanto a los conceptos que van a ser volcados.

Por mi parte ya he aprendido, incorporado muchos de los conceptos que acaba de aportar el Profesor Carlos Delpiazzo que debo decir, además, que me dejó sin argumentos en parte de mi disertación, en la cual claramente también iba a citarlo porque es el referente en cuanto a estos temas de la Ética.

Así que bueno, el agradecimiento, espero que sean indulgentes conmigo y por otro lado quiero hacer algún agradecimiento particular.

Veo compañeros de la Cátedra de Derecho Administrativo, veo personas que me honran con su amistad, veo alumnos de Posgrado y veo alumnos de Grado, que están interesados también por el tema Corrupción así que un agradecimiento nuevamente a todos.

Bueno, comenzaré entonces con el tema, no me llevo del todo bien con los micrófonos, espero me escuchen bien.

Lo que he tratado de hacer es bueno, una visión jurídica desde la Constitución de la República, particularmente los Artículos 58 y 59.

Generalmente cuando se habla de la Ética Pública, cuando se habla de la Corrupción no se menciona la Constitución, inclusive se ha dicho que la Constitución de la República no trae normas sobre Ética Pública.



Bueno, un poco eso es lo que quiero decir hoy, que no solamente trae normas sobre Ética Pública sino también relativas a la Corrupción. Particularmente a mi juicio el Artículo 59 en el inciso primero, y el Artículo 58 de la norma constitucional, también en el inciso primero. Es así entonces que comenzaré diciendo que resulta claro que la actuación profesional en la función pública debe siempre estar encuadrada en el seno de una Administración que está sometida a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

En definitiva, sólo puede tener lugar legítimamente bajo un régimen de Estado de Derecho. Ello resuelta aún más importante frente a fenómenos como la corrupción, lo que nos ocupa ahora no en forma exclusiva debo decir, o la proliferación de conflictos de intereses que han ocasionado estragos importantes en la imagen y en la economía de los países, así como una constante preocupación por las condiciones personales y el comportamiento de los funcionarios públicos frente a situaciones que puedan tener en entredicho o poner en entredicho su imparcialidad, su objetividad, su probidad y algunos de los otros Principios recogidos en el Artículo 4o del Estatuto del Funcionario Público de la Administración Central, la Ley 19.121, como también en el Código de Ética en la Función Pública, la Ley 19.823 de 18.09.2019.

Esto se relaciona directamente con el sentido ético de la función pública; ello implica demostrar cualidades que permitan apreciar al funcionario como una persona fiable, digna de confianza, que está dispuesta a cumplir con dignidad y sin apartarse de sus deberes con lo que el ejercicio de esa función pública le requiere.

Como vemos la Constitución uruguaya exige que el desempeño de la función pública sea con dignidad, con ética, con neutralidad en las convicciones, - un aspecto muy poco mencionado -, con transparencia como acaba de señalar el Profesor Emérito Delpiazzo, y con un acentuado servicio al interés general o al bien común; conceptos estos últimos difícilmente distinguibles como bien ha trabajado este aspecto el Profesor Emérito Carlos Delpiazzo, y en su momento también el Profesor Juan Pablo Cajarville.

Con base en la regla de Derecho entonces, con la cual contamos con una definición en nuestro ordenamiento jurídico, - que también lo mencionara el Profesor Carlos Delpiazzo -, actualmente el Artículo 40 literal a de la Ley 20.313 del Código de lo Contencioso Anulatorio, anteriormente el Decreto Ley 15.524, en el Artículo 23 y aún con anterioridad en la Ley 13.318 del año 1964 los Artículos 345 a 347. Así que como verán, no es un concepto nuevo, pero sí muy importante para nuestro ordenamiento jurídico.

Y claramente la Administración debe actuar entonces con ajuste a Derecho. Debe actuar con objetividad y carente de toda influencia de intereses particulares o preferencias personales lo cual de no ser observado no sería tan sólo una simple transgresión ética de los funcionarios, sino que constituiría además una clara conducta anti jurídica.

El desempeño funcional debe ser y en esto enfatizo, imparcial y con fidelidad a la regla de Derecho en su interpretación y ejecución.

La Constitución española en esto nos enseña mucho, y casualmente el Artículo que mencionara el Profesor Emérito Carlos Delpiazzo, el Artículo 103 que nos interesa particularmente dos ordinales, el ordinal uno y el ordinal tres.

El Ordinal uno en cuanto interesa a esta disertación dice "la Administración Pública sirve con objetividad a los intereses generales" y el Ordinal tres dice "la Ley regulará el Estatuto de los Funcionarios Públicos "y luego al final, "y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones".

En el Reino de España el funcionario entonces no puede contradecir con su actuación las Directrices del gobierno, pero sí realizar una interpretación de las mismas acorde con el interés general. No puede obstaculizar el desarrollo del programa de gobierno fundado en su ideología política, sino que debe además y acorde con dicho principio, actuar sin favoritismos ni discriminaciones. Se configura así la neutralidad del empleado público como otra vertiente del deber de objetividad de la Administración al cual me referiré un poco más adelante cuando hable específicamente del Derecho uruguayo.

Estamos entonces ante lo que la doctrina española denomina "la eficacia indiferente", por cuanto la neutralidad exige al funcionario ser eficaz tanto si perjudica como si favorece la política del gobierno que está en el Poder. En esos términos se plantea por tanto la tensión sin duda inevitable entre el gobierno y la Administración. La Administración tiene que ser políticamente neutral y el gobierno tiene que ser también neutral desde lo Administrativo, esto es, tiene que limitarse a dirigirla e impulsar su actuación que como el propio precepto subraya debe llevarse a cabo con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.

Y por qué les estoy hablando de este Artículo 103 y particularmente del ordinal 1o de dicha disposición; porque es tomado del Artículo 20 de la Ley Fundamental de Bohn, la Constitución de la República Federal alemana que a su vez es la fuente, es la base de nuestro Artículo 2o del Decreto 500/991 sobre normas generales de actuación administrativa en la Administración Central en cuanto establece que la Administración Pública debe servir con objetividad los intereses generales con sometimiento pleno al Derecho.

¿Qué pasa con nuestros Artículos 58 y 59? . Su origen es en la Constitución de 1934, allí estaban incluidos los dos en un sólo Artículo que era el 57.

Esta Reforma Constitucional de 1934 fue muy importante, aglutina en una sola Sección los Principios, incorpora veintitrés Artículos, una Sección para constitucionalizar los Entes Autónomos que antes solamente eran el Artículo 100, incorpora los Servicios Descentralizados, constitucionaliza la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas, deja de ser la Alta Corte de Justicia para ser la Suprema Corte de Justicia y así otros avances muy importantes y también en este tema, en cuanto a la incorporación en un sólo Artículo de los que luego en la Reforma de 1952 pasan a ser los actuales Artículos 58 y 59 que sin cambios en su redacción, llegan a la Constitución vigente de 1967.

Se trata entonces de dos normas fuertemente correlacionadas y ya desde su origen con claras imbricaciones, con claro relacionamiento entre sí por cuanto se integran y complementan mutuamente. Particularmente el precepto contenido en el Artículo 59 inciso 1o debe ser interpretado ahora a nuestro juicio "el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario" como la base fundamental del Estatuto del funcionario, pero particularmente como el criterio rector de la actuación del funcionario. A la luz de las disposiciones del Código de Ética Pública contenido como ustedes saben en la ya mencionada Ley 19.823. El Artículo 58 de la Constitución de la República, como dije íntimamente relacionado con el 59 ya desde

el comienzo y cuanto interesa a este aporte jurídico en el inciso 1º dice "que los funcionarios están al servicio de la Nación y no de una fracción política".

Y cuál es el origen de esta disposición del 58; este Artículo como principio básico prohíbe toda actividad proselitista en los lugares de trabajo, señalándose la voluntad del Constituyente de rechazar el sistema llamado de los despojos que predominara en los Estados Unidos evitando que la estabilidad de los funcionarios públicos dependiera del Partido Político que ejercía el Poder Ejecutivo.

Esto lo señala muy bien el gran constitucionalista uruguayo Justino Jiménez de Aréchaga, el tercero de los Aréchaga en su obra "La Constitución de 1952" en el Tomo II.

En dicho Artículo 58 encontramos también consagrado el Principio de Neutralidad del Derecho Público francés del cual deriva el Principio de la Neutralización de las convicciones que se haya emparentado con los Principios de objetividad e imparcialidad que he mencionado, y por qué hablo de este Principio de Neutralidad del Derecho Público francés. Esto tiene su origen en una decisión del 28 de mayo de 1954 del Consejo de Estado francés, órgano de la Administración que juzga a la Administración, esto es por razones históricas que no cabe ahora referir, conforme al cual se afirma la libertad de opinión de los funcionarios públicos aunque las considera limitada en interés del servicio por el deber de reserva vinculado en última instancia al deber de confidencialidad del funcionario y sobre todo por la obligación de neutralidad en el ejercicio de sus funciones.

La neutralidad u objetividad está vinculada al criterio de imparcialidad que debe presidir conforme el derecho francés el desempeño de la función pública.

A modo de brevedad diré que la neutralidad de los agentes al servicio de la Administración supone o exige de éstos conforme el Derecho francés y que yo sustento que también se sostiene en el 58 de nuestra Carta, que éstos se abstengan en su actividad laboral de adoptar una postura concreta sobre temas de naturaleza política, religiosa o filosófica que comprometerían la función y su ejercicio.

Conforme la doctrina francesa tal postura neutral se supone generará que los administrados se sientan más confiados en sus relaciones y vínculos con la Administración.

Volviendo a nuestro Artículo 58 éste se limita a consagrar la prohibición para los funcionarios de realizar dentro de los lugares de trabajo y en horas de trabajo toda actividad extraña, ajena al ejercicio de la función y reputa ilícita, esto es, considera como ilegítima y por tanto contraria a derecho la dirigida a fines de proselitismo, de cualquier especie: política, religiosa, sindical, etc.

En Uruguay qué podemos entender por proselitismo; bueno, Justino Jiménez de Aréchaga entendía que el proselitismo era el celo de ganar partidarios para una fracción, parcialidad o doctrina.

Debo mencionar - tampoco puede ser objeto de esta disertación -, que en los últimos años en Uruguay tenemos la Ley 17.940, la Ley de Fuero Sindical que en su Artículo 1º último inciso permite que las garantías que en ella prescriben también alcanzan a los trabajadores que

efectúen actuaciones tendientes a la constitución de organizaciones sindicales dentro de los lugares de trabajo.

Por otra parte, el Art.30 numeral 1 de la Ley 19.121, el Estatuto del Funcionario Público de la Administración Central, si bien prohíbe realizar en los lugares y horas de trabajo toda actividad ajena a la función, admite la actividad sindical. En similar sentido va el Artículo 9o literal a. del Código de Ética Pública, Ley 19.823, que podría analizarse o no una supuesta inconstitucionalidad de estas normas que por supuesto no corresponde abordar en esta disertación.

Pese a todo lo que he dicho, a lo que dice la Constitución, ello no implica que el funcionario no pueda hacer valer en otros temas sus objeciones a la norma que se le pretende aplicar o al mandato recibido de sus superiores como lo establecen claramente el Artículo 29 numeral 3o del Estatuto del Funcionario Público para la Administración Central, o aún descartarlo, como lo establece para los Funcionarios Policiales el Artículo 8o de la Ley 18.315, la Ley de Procedimiento Policial que dice que el personal policial tiene especialmente prohibido cumplir órdenes manifiestamente ilegales o que atenten contra los derechos humanos o el sistema republicano, democrático de gobierno. Por supuesto que el funcionario debe hacerlo siempre de forma respetuosa y al amparo de la tutela que la Constitución le otorga a la libertad de expresión, a la independencia de la conciencia moral y cívica, así como particularmente a la dignidad humana. Todo ello conforme los Artículos 29, 54 y 72 de la Constitución de la República.

Volviendo al Artículo 59, en el inciso 1o reafirma y complementa el principio de que el funcionario directamente está sujeto a la autoridad por así decirlo de la Nación al señalar que los funcionarios sólo deben dedicarse en tales circunstancias al ejercicio de la función pública. Ese inciso 1o resulta imprescindible para este estudio; el aforismo de "el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario" requiere y reviste capital importancia.

Sobre este Artículo ha señalado el Profesor Cajarville que en él existen o coexisten dos principios: el Principio Protector que implica el predominio del interés del trabajador y el Principio de Prevalencia del interés de la función. Esto es de la actividad que el funcionario debe cumplir. En abstracto ambos Principios resultan antitéticos, esto es contrarios, opuestos o aún antagónicos; sin embargo, en la práctica no debe haber tal oposición pues el Principio Protector preside el dictado y la aplicación de las leyes protectoras del trabajo que cumplen el mandato de los Artículos 53 a 57 de la Constitución de la República en tanto el Principio de Prevalencia del interés de la función o del servicio debe presidir el dictado y la aplicación de las normas estatutarias.

También se ha señalado por importante doctrina; el Profesor Ruben Correa Freitas, la Dra. Cristina Vázquez, que el Artículo 59 de la Constitución recoge el Principio de Dedicación a la Función Pública que significa que el funcionario tiene como deber fundamental servir a la Administración por lo que sus intereses privados, sus obligaciones particulares, deben ceder ante el interés de la función pública.

Por tanto, el Principio apuntado le impone al funcionario una obligación de servicio para con el Estado y con la Administración, lo cual supone un renunciamento a los intereses privados o particulares que siempre deben ceder ante el interés público.

El funcionario debe tener conciencia de su deber de servicio permanente para con el Estado y la Nación.

Este Principio consagrado en el Artículo 59 entonces, sería una precisión del consagrado en el Artículo 58 pues el funcionario se encuentra al servicio de la Nación y debe dedicarse por entero a su función en los lugares y horas de trabajo siendo ilícito cualquier tipo de proselitismo.

Luego de esta introducción, podría decir mucho más del Artículo 58 quisiera hacer algunos breves comentarios sobre el concepto de Corrupción conforme nuestro ordenamiento jurídico.

A nadie escapa el flagelo que es hoy la corrupción, sus causas son múltiples y resulta complejo identificarlas. Puede tener un origen cultural, se ha dicho que es un fenómeno propio de la naturaleza humana que se vincula con la ausencia de educación, la falta de valores o la decadencia de la sociedad. O que deriva del ejercicio de una posición de poder sin los controles adecuados lo cual favorece su surgimiento o aún su expansión obteniéndose beneficios ilícitos indebidos.

El Código de Ética en la función pública contenido en la Ley 19.823 en el Artículo 12 refiere a la Corrupción. Dice textualmente "se entiende que existe corrupción entre otros casos en el uso indebido del poder público, de la función pública para obtener directa o indirectamente un provecho económico o de cualquier otra naturaleza para sí o para otro, se haya causado o no un daño al Estado o a la Persona Pública no Estatal. Se considera parte integrante del concepto de corrupción la oferta que realice una persona física o jurídica, o funcionario público, de un beneficio de cualquier especie para sí o para un tercero, a los efectos de que cumpla con las tareas propias de su función u omita cumplirlas".

Luego continúa, pero a nuestros efectos lo que importa es hasta esta parte de ese inciso segundo de este Artículo 12.

El Artículo que viene de referirse no aporta en concreto el concepto de Corrupción, sino que señala los casos en que existe Corrupción, en que se presentan conductas corruptas o que se considera que integran el concepto, así como la finalidad y naturaleza de las mismas, siendo irrelevante que se haya ocasionado o no un daño al Estado o a una Persona Pública no Estatal a las cuales asimila al Estado en cuanto al perjuicio causado por el flagelo de la Corrupción.

La definición entonces, de Corrupción, usando con cierta liberalidad si se me permite el término, contenida en el inciso 1o del Artículo reitera y es a su vez más amplia que la establecida en el Artículo 10 del Decreto 30/003 del 23 de enero de 2003 de normas de conducta en la Función Pública que reglamenta la Ley 17.060 de diciembre del año 1998 que tiene su propio concepto en el Artículo 3o.

El inciso 2o del Artículo 12, considera parte integrante del concepto determinadas conductas, todas ellas de índole penal, como ya lo había establecido en el Artículo 34 de la Ley en relación con la prohibición de recibir regalos, un tema muy importante, he escrito un artículo doctrinario sobre el punto, porque hay una contradicción directamente entre lo que establece

esta Ley 19.823 y lo que establece directamente el Estatuto del Funcionario Público para la Administración Central.

Como decía entonces, en este Artículo 12, en el inciso segundo, se pone hincapié en los aspectos penales con referencia a verbos nucleares como "cumplir" que en el Código Penal integra el tipo penal del delito de cohecho simple del Artículo 157 inciso 1o del mismo; omite cumplirlas en referencia al Artículo 158 del Código Penal, dentro del tipo penal de cohecho calificado y se agrega también la oferta en referencia al ofrecimiento previsto en el Art. 159 del Código que tipifica el delito de soborno.

Sin pretender ingresar en consideraciones de índole penal, cabe expresar que la descripción de nuestra Ley pone el acento precisamente en aspectos penales señalando lo inescindible de la conducta corrupta que quebranta normas de prohibición como el provecho económico, o de toda otra naturaleza obtenido por el funcionario infiel, independiente de que se haya ocasionado o no un daño al Estado o a una Personal Pública no Estatal.

A falta de un concepto claro en nuestro Código de Ética Pública entonces, podemos definir a la Corrupción como el abuso del poder público para generar ganancias privadas como sostienen Casas, Zamora y Miguel Carter o como una conducta que se desvía de los deberes formales de un cargo público por elección o por nombramiento a causa de ganancias privadas en el ámbito personal, de la familia o de círculo cercano conforme la definición de Joseph Nite en su obra de 1967.

Este tipo de definiciones tiene el beneficio de abarcar a la gran mayoría de las conductas convencionalmente entendidas como corruptas entre distintas culturas e incluye conductas ilegítimas y con reproche penal, tales como el soborno, la malversación de fondos, el tráfico de influencias, el lavado de dinero, la extorsión, fraude y otras.

En el ámbito de nuestro Derecho Administrativo importa la noción de Corrupción, aplicada al sector público y por tanto revista particular importancia todo lo que acabo de expresar.

Puede decirse brevemente que la Corrupción es el abuso del poder público, para obtener un beneficio particular en concreto conforme la definición que se ha hecho referencia contenida en el Artículo 3o de la llamada Ley Anti Corrupción 17.060 de Prevención y Lucha contra la Corrupción.

Se trata de un flagelo que el funcionario se ve impulsado entonces por factores de diversa índole, externos e internos, a actuar de modo distinto a los estándares o directrices del sistema para favorecer intereses particulares propios o de terceros a cambio de una recompensa que puede ser de índole diversa.

Voy a adelantar un poquito el tema, y voy a hablar de nuestra interpretación actual de los Artículos 58 y 59 de la Constitución.

Esto es, cómo puede ser importante como base constitucional de lucha contra la Corrupción, sosteniendo que directamente la Carta Constitucional tiene normas si bien dispersas, pero no una norma genérica en relación con el concepto de Corrupción, y esto dicho con los respetuosos Profesores de Derecho Administrativo y Profesores de Derecho Constitucional, que están presentes en este momento en esta Sala.

Dentro de este concepto que viene de señalarse, resulta fundamental realizar un nuevo abordaje partiendo desde el concepto de Corrupción conforme el nuevo escenario y la importancia que mantiene y ahora se ve vigorizada los Artículos 58 y 59 de la Carta.

Conforme el Artículo 58 en el inciso 1o, los funcionarios se encuentran al servicio de la Nación en la cual la soberanía existe en toda su plenitud y radicalmente conforme el Artículo 4o de la propia Carta. Sin que sea relevante el régimen jurídico bajo el cual se desempeñan, esto es si son funcionarios presupuestados o contratados, si ocupan cargos de naturaleza política o de particular confianza, pues la Constitución no realiza distinguos en este aspecto, ni tampoco lo hacen las múltiples citadas Leyes 17.060 y 19.823.

La Carta entonces es clara y terminante en cuanto a que quien sirve como funcionario público debe ser políticamente neutral, y en el desempeño de sus funciones, atender a sus deberes. Fundamentalmente pone el acento en la servicialidad, en la vocación de servicio como fundamento y justificación de la existencia de la Administración.

Respecto del concepto de Nación, el mismo es utilizado, aparece consagrado en los Artículos 4, 24, 34, 77 inciso 1o, 58 por supuesto, 82 y 85 numeral 16 de la Carta. Por tanto, el Constituyente lo ha tenido muy presente y claramente por la importancia que reviste.

El Artículo 59 inciso 2o por su parte consagra un reconocido aforismo que acentúa el criterio de la servicialidad del funcionario con el objetivo del logro del bien común, pero eso sólo puede ser posible si la servicialidad y el bien común están presentes en el desempeño de la función pública como forma de respeto de la persona humana, y de los derechos y garantías que la propia Constitución consagra en forma expresa o implícita.

Destaca entonces la íntima relación entre estos dos conceptos; particularmente concibiendo al Estado como un instrumento para el permanente desarrollo del individuo y de la Sociedad Civil, esto lo ha remarcado muy bien por ejemplo Segañe, un autor chileno. El Estado existe y es un instrumento para servir a la sociedad y a la persona y no así mismo a través del logro del bien común. A tal fin entonces debe buscar y desarrollar obligatoria y permanentemente la realización espiritual y material en plenitud de todos y de cada una de las personas con pleno respeto de los derechos y garantías consagrados expresa o implícitamente en la Carta.

Respecto del bien común, porque lo he mencionado varias veces y creo que hay que referirse, prestigiosa doctrina, claramente la cita corresponde al Profesor Emérito Carlos Delpiazzo, ha señalado que este no consiste en la simple suma de los bienes particulares de cada integrante del cuerpo social. No es posible realizarse en solitario prescindiendo de ser con y para los demás. La responsabilidad de edificar el bien común es propia del todo social por lo que constituye la razón de ser de la organización política de la colectividad.

Por lo tanto, corresponde al Estado garantizar cohesión, unidad y organización a la Sociedad Civil de la que es expresión, a fin de que esta pueda lograr el bien común con la contribución de todos.

Respecto de la servicialidad, se señala que es la contra cara de la centralidad de la persona humana que proviene de su propia etimología. El fundamento y la justificación de la existencia de la Administración radica precisamente en su servicialidad, la Administración está destinada

a servirnos a todos y por tanto eso es también lo que debe marcar el desempeño de la función por parte de todos los que somos funcionarios públicos.

Firmemente anclados entonces en la servicialidad y en el bien común, y estrechamente relacionados entre sí, los Artículos 58 y 59 permiten inferir que el ejercicio del poder público se justifica para procurar el bien común, por perseguir el logro pleno de la persona humana con un claro contenido ético. No de cualquier forma, sino con respeto de la dignidad humana y de la regla de Derecho.

Si bien la Constitución uruguaya actual no contiene una cláusula genérica en materia de Ética en la función pública, existen una serie de disposiciones en la materia entre las cuales prestigiosa doctrina incluye a los Artículos que venimos comentando.

Cuáles son esos otros Artículos; son el 115.2 que permite la remoción por cada Cámara de los Legisladores por actos de conducta que les hicieren indignos de sus cargos después de su proclamación, el propio 168 numeral diez, por ineptitud, omisión o delito en lo que ahora importa por actos de corrupción. Tratándose también en el caso de los funcionarios diplomáticos y consulares que podrán ser destituidos por la comisión de actos que afecten su buen nombre o el prestigio del país y de la representación que invisten. El Artículo 198.1 de la Carta, que admite la destitución por el Poder Ejecutivo en similares condiciones al artículo antes citado, en caso de ineptitud, omisión o delito en el ejercicio del cargo, de la comisión de actos que afecten su buen nombre o el prestigio de la institución a la que pertenezcan, y alguno más como el numeral 5 del 275.

En definitiva conforme la importancia de la servicialidad y el bien común en un régimen de Estado de Derecho el aforismo del Artículo 59 que ya todos conocemos, " que el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario", consagrado entonces como un mandato ineludible y de aplicación inmediata y general adquiere ahora una nueva dimensión, no ya solamente como base fundamental, sino también y muy concretamente como un precepto de cardinal importancia a tenerse en cuenta por el funcionario en el ejercicio de la función y respecto de la conducta que asuma durante su desempeño.

Como breve conclusión y para ir terminando esta disertación debo decir que la Constitución uruguaya entonces desde 1934 contiene el precepto ubicado en el Artículo 59 de que el funcionario existe para la función, para su correcto ejercicio, y no a la inversa utilizándola en forma espuria. Ello complementado con el precepto de que los funcionarios sirven a la Nación como ustedes saben, recogido en el Artículo 58.

Entonces se ha intentado analizar tales preceptos, otorgándoles un nuevo alcance. Desde la vocación de servicio del funcionario y desde el bien común como pilares fundamentales que debe perseguir además del absoluto respeto a la dignidad de la persona y a los derechos humanos con fundamento en la Ética en todos sus actos.

Se ha sustentado la absoluta vigencia de tales artículos, así como la importancia que revisten como preceptos de alcance general, y del máximo valor normativo como firmes cimientos en el combate contra los flagelos que afectan gravemente la sociedad como es el caso de la Corrupción.



Lo más importante quizás ha sido remarcar la importancia de ambas normas constitucionales, que ya no pueden verse como simples expresiones o aforismos que deben presidir el dictado de todo Estatuto del funcionario sino que en una interpretación evolutiva, deben valorarse como importantes preceptos de la mayor relevancia y amplio alcance, y no sólo esto en el ámbito del Derecho Constitucional, del Derecho Administrativo, o del Derecho de la Función Pública sino también en el ámbito del Derecho Penal cuyas conductas tipificadas como delito en el Capítulo IV " delitos contra la Administración Pública " tienen como principal bien jurídico a tutelar y fuente de derecho de la mejor importancia a los Artículos 58 y 59 que he tenido el honor de comentar para ustedes.

Muchas gracias, disculpe si fue un poco extensa la disertación.

*Doctora en Derecho y Ciencias Sociales, Profesora Agregada Gr. 4 de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Se desempeña además como docente Externa para organismos públicos e instituciones privadas. Es autora de varias obras de su especialidad.*

## **Integridad de los Sectores Públicos antídoto contra la Corrupción**

---

Muchas gracias, buenos días para todos. Es para mí un gran honor estar esta mañana con ustedes, en un tema que nos convoca todos los días, porque hoy es el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, por lo tanto, es un día para la reflexión, pero luchar contra la Corrupción es una tarea de todos los días.

Por lo tanto, celebro que exista esta instancia que nos lleve a interactuar y a trabajar juntos para forjar esos parámetros de avance de nuestra sociedad.

Quiero agradecer a la JUTEP que me ha dado el honor de participar en la mañana de hoy, a su Directorio, y también especialmente a sus funcionarios.

Hace más de quince años tengo la suerte de ser docente Externa de la JUTEP, y trabajo con ellos, ahora son catorce, en un momento fueron once, doce, son pocos, un poco más que los dedos de las manos nos alcanza para poder enumerarlos y sin embargo son gigantes, porque hacen las tareas de JUTEP con gran compromiso y responsabilidad, allá veo a Rosario y a todos los compañeros en la persona de Rosario, felicitaciones por la tarea que hacen todos los días.

Y además es un gran honor participar de esta mesa de queridos compañeros, con todos me ha tocado trabajar en esta vida, con el Dr. Jorge Rodríguez Pereira en el Tribunal de Cuentas, con el Dr. Juvenal Xavier en la docencia y qué decirles del Profesor Carlos Delpiazzi, quien ha sido, es y será mi Maestro, y voy a decir algo que él en este momento va a decir no; pero Carlos Delpiazzi como ustedes han vivenciado hace unos instantes cuando expuso, es nuestro Carlos Gardel del Derecho Administrativo y como Carlos Gardel, cada día canta mejor.

Y ustedes mismo lo han podido comprobar, así que para mí es un placer hablar del tema que hoy nos convoca, que es el de la integridad de los servidores públicos.

Y vamos a trazarnos un objetivo, el objetivo del día de hoy, es justamente analizar, identificar el alcance y las implicancias del Principio de Integridad en el obrar diario de los servidores públicos.

He dividido el tema en cuatro aspectos que veremos juntos: comenzaremos por ver su regulación normativa, continuaremos abordando el alcance del Principio de Integridad para luego adentrarnos en lo que es el régimen de responsabilidades y la incidencia de la vida privada de los servidores públicos en el desempeño de la función pública. Y por último elaboraremos algunas reflexiones finales.

Así que, sin más, vamos al primer punto que nos convoca, porque no es fácil ser el último, hacer el cierre, ya todo se ha dicho, así que vamos a tratar de dar nuestra mirada al tema.

En cuanto a la regulación normativa, nos enseña desde hace más de veinte años el Profesor Delpiazzo que existe una tendencia internacional en la que Uruguay también está inserto y es el de la juridización de la Ética Pública. Es algo que tiene que estar claro en todos nosotros; la juridización o positivización de la ética pública implica establecer en normas jurídicas, los principales postulados éticos.

Esto es muy importante porque la norma jurídica tiene todos los caracteres que todos conocemos, entre ellos la coercibilidad. Recuerdan la época liceal donde nos hablaban de los parámetros éticos, la moral, y también lo contrastábamos con las normas jurídicas.

Bueno, es muy importante tener reglas claras de actuación, principios que se reconozcan en las normas jurídicas, para que todos los conozcamos y sean también pautas consolidadas y por supuesto que también está el tema de poder sancionar ante el incumplimiento. Pero desde ya les quiero advertir que la normativa ética no busca simplemente sancionar; lo que busca generar son mecanismos disuasivos y persuasivos. Todos sabemos que si tenemos normas jurídicas es posible un mejor control, si los controles funcionan adecuadamente.

Pero no basta con normas jurídicas, tenemos que lograr el engranaje necesario como veremos a continuación para que la ética sea una realidad de todos los días. Yo creo que la juridización es muy importante, pero no alcanza por sí sola. La ética es mucho más que la norma jurídica.

En cuanto a nuestro marco normativo anti corrupción ustedes conocen que Uruguay tiene normas de fuente internacional, ha ratificado la Convención Interamericana contra la Corrupción mediante Ley 17.008 y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción mediante Ley 18.056.

El Profesor argentino Agustín Gordillo indicaba que la Convención Interamericana contra la Corrupción, es un verdadero tratado de Derechos Humanos, y vaya si lo es.

Al igual que la Convención de Naciones Unidas persiguen dos objetivos: un objetivo interno donde lo que se procura es que los Estados adopten normas propias, teniendo en cuenta también sus parámetros culturales que en esto tienen mucho que ver, y un objetivo externo o exterior, donde lo que se busca es que los Estados cooperen entre sí en la lucha contra la Corrupción.

Ambas Convenciones contienen preceptos que refieren en forma expresa a la integridad. En el caso de la Convención Interamericana, su Artículo 3o., refiere a las medidas preventivas y nos dice "es necesario prevenir los conflictos de intereses, ayudando a preservar la confianza en la integridad de los funcionarios públicos y de la gestión".

Pone el énfasis en la integridad.

La Convención de Naciones Unidas por su parte, establece que una de las finalidades que perseguirá, "será promover la integridad, la rendición de cuentas, y la debida gestión de los bienes y recursos públicos".

O sea que vean que ambos Tratados Internacionales nos hablan en forma expresa de la integridad.

Tenemos nuestro marco normativo en cuanto a normas internas y ya se ha hablado en la mañana de hoy, de nuestra Constitución de la República. Verán que nuestra primera Constitución, de la que siempre nos sentimos orgullosos, las normas constitucionales para los uruguayos son muy importantes, es nuestra Carta Magna, y ustedes analizarán en el transcurso del tiempo como los uruguayos somos personas muy reacias a modificarla en general.

Nuestra Constitución contiene preceptos éticos, sobre todo en el Artículo 59: “el funcionario existe para la función, y no la función para el funcionario”.

Y por debajo – desde el punto de vista del valor y fuerza de las normas - tenemos otras disposiciones. Uruguay cumpliendo con los objetivos que se trazaban en la Convención interamericana, dictó la Ley 17.060 conocida por ustedes como Ley Cristal o Ley Anti Corrupción. A su amparo se dictó el Decreto 30/2003, que fue muy importante en su época. Y por último, la perla del año 2019, fue la Ley 19.823 que establece un Código de Ética en la Función Pública.

Las particularidades de este Código son varias: en primer lugar, establece un concepto de funcionario público de carácter amplísimo. Bien nos adelantó hoy el Profesor Delpiazzo, que el concepto amplísimo que acuñan nuestras normas de funcionario público a los efectos de ética pública y penales, implican el extender el brazo considerando a todo aquel que ejerce o desempeña función pública.

No importa a qué título, no importa si es onerosa o gratuita la tarea, y esto es muy importante, no solamente abarca a los funcionarios públicos que ejercen tareas para una Administración Pública estatal, para el Estado, sino que también abarca a aquellas personas que desempeñan función pública para las Personas Públicas no Estatales que como también nos recordó el Profesor, al día de hoy, son cuarenta y nueve. Por lo tanto, esto es algo muy trascendente.

En segundo lugar, el Código establece un elenco de Principios, los llama Principios Generales, así como valores organizacionales, y nos habla de la transparencia, la publicidad, la buena fe, la obligación de motivar las decisiones, la obligación que tiene todo aquel que se desempeña en la función pública, de explicar, de brindar el fundamento de sus decisiones.

La capacitación como principio, la imparcialidad, la probidad y un largo etc.

Además de estas disposiciones el Código también introduce lo que son preceptos referidos a prohibiciones e incompatibilidades y describe conductas que no se pueden verificar.

Por otra parte, también el Código establece mecanismos preventivos, como por ejemplo sus Artículos 10 y 11, prevé la llamada “consulta administrativa”. Cuando un servidor público tiene dudas de cómo actuar puede efectuar la consulta por escrito al jerarca y el jerarca tendrá un plazo de 30 días para contestar.

De manera que, si el funcionario público ajusta su conducta a lo que ese jerarca indica en la consulta escrita, siempre que sea legítimo por supuesto en el ámbito de cumplimiento de las restantes normas, puede exonerarse y se va a exonerar de responsabilidad administrativa. Son mecanismos preventivos de responsabilidad.

También es importante señalar, hoy lo comentaba el Profesor Juvenal Javier que este Código de Ética establece un concepto amplio de Corrupción, y deja por el camino aquellas críticas que teníamos en nuestro país con el concepto de Corrupción que se acuñaba en nuestro ordenamiento jurídico a partir de la Ley Anti Corrupción y del Decreto 30. En esa época se subsumía el concepto de Corrupción a la obtención de un provecho de naturaleza económica; pues con muy buen tino la Ley 19.823 no lo circunscribe a un provecho de naturaleza económica sino que con amplitud nos habla de que existe Corrupción cuando se produce el uso indebido del poder o de la función pública para obtener un provecho de naturaleza económica o de cualquier otro tipo de naturaleza, se haya causado o no un daño al Estado o a la Persona Pública no Estatal. Por lo tanto, se celebra ese concepto amplio también de Corrupción.

El Código establece normas de aplicación.

Y por ejemplo ustedes verán plasmado en el Art. 40 la obligación de denunciar: no vale mirar para el costado cuando sucede algo que implica una práctica indebida.

Es fácil mirar para el costado, pero no es lo correcto y por lo tanto el Art. 40 establece la obligación de denunciar que tenemos los servidores públicos cuando estamos ante una práctica indebida o práctica corrupta.

Y por último y muy importante, el Código prevé la necesaria protección de testigos y denunciantes. Cómo vamos a detectar la corrupción si el funcionario que se atreve a denunciar lo hace y a los diez minutos hasta el portero del organismo sabe qué fue lo que dijo, qué denunció, a quién denunció, y en qué tenor. Y yo creo que aquí en Uruguay todavía tenemos un debe, tenemos que seguir trabajando en esto, y cortar perdón la expresión, pero todos conocemos la expresión, de la vieja y querida "radio pasillo", que no es fuente de Derecho, pero a veces termina pareciendo que sí lo es en los organismos públicos.

Por lo tanto, es muy importante preservar al denunciante y a los testigos porque es la forma de tener la fuente de información que nos permita quebrar la confianza entre los corruptos y también detectar cualquier tipo de práctica prohibida.

Y hasta aquí lo que es nuestro marco normativo.

Procuraremos ver el alcance. Dijimos que este Código reconoce una serie de Principios Generales. Yo creo que podemos graficar esta situación de la siguiente forma: la integridad, es el Principio de los principios de la ética pública, porque sin integridad no hay nada.

Sin perjuicio de esto nuestra normativa reconoce a la integridad, pero no le brinda el nomen juris integridad como lo hace con otros Principios para luego desarrollarlos.

Sí lo hace por ejemplo con los Principios de probidad e imparcialidad que a continuación abordaremos.

En otros países como por ejemplo en España, se identificó esa problemática, la derivada de la corrupción sobre todo de ciertos sectores de actividad, por ejemplo, en la contratación pública que como todos sabemos es un sector "bandera roja" en materia de corrupción, en tanto es un sector propenso a la corrupción, al manejarse fondos públicos.

En Europa se detectó el gran problema que existía con la corrupción sobre todo en compras públicas y se trató de medir, de manera que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que es el órgano de control en materia de competencia en el mercado, procuró medir el impacto de la corrupción en números y llegó a la conclusión de que el 4.7 por ciento del producto bruto interno de España se perdía por la corrupción en la contratación pública. Veán de qué estamos hablando.

Estamos hablando de que la contratación pública en los países aproximadamente representa entre el quince y el veinte por ciento del Producto Bruto Interno. Y un 4.7 en España se va por la corrupción. Entonces, a raíz de eso, cuando se dictó la última Ley de Contratos en el sector público, que es del año 2017, en España se introdujo el Principio de integridad, se introdujo su reconocimiento porque por supuesto que ya regía, a texto expreso en el Artículo 1o de esa normativa.

Bien, en nuestro país como dijimos se hace referencia a la integridad, sobre todo en el reconocimiento de los Principios de probidad e imparcialidad. Y veremos cómo lo regula nuestro orden jurídico.

El Principio de probidad. Ser probo significa ser honesto, ser recto, ser integro. El Artículo 13 de la Ley 19.823 de este Código de Ética en la función pública, dice que "todo funcionario debe tener una conducta recta, honesta e integra desechando todo provecho o ventaja indebida en el desempeño de su función".

Y esta norma que no es nueva, simplemente se le dio rango legal pero ya existía en el Decreto 30/2003, contiene un segundo inciso cuya lectura les recomiendo en forma permanente.

El Art.13 inciso 2o de la Ley 19.823 dice que "el funcionario público también debe evitar exteriorizar la apariencia de estar actuando en contra de las normas de conducta en la función pública". De manera que la norma jurídica nos dice que hay que ser y parecer.

Por eso la exteriorización de la conducta pasa a ser un elemento trascendente; hay que ser y parecer, lo cual forma el concepto mismo de la integridad.

En materia de imparcialidad, vamos por el mismo camino, las normas consagran el Principio de imparcialidad, nos obliga a actuar sin sesgos en forma neutral, y objetiva.

Se prevén los institutos de excusación y recusación, incluso en las normas de procedimiento administrativo común también.

La excusación cuando es el propio funcionario que advierte que existe una circunstancia susceptible de afectar su imparcialidad y da un paso al costado. Por supuesto lo comunica al jerarca y el jerarca es quien tiene la última palabra, pero es una obligación, debe excusarse el funcionario que se encuentra en esa circunstancia.

Por supuesto en forma razonable y ponderada porque estamos en un país muy pequeño, marcados por aquello que decía la pauta publicitaria de un refresco "acá, nos conocemos todos".

Entonces la excusación tiene que ser también en forma razonable y ponderada.

La recusación por su parte se produce cuando el jerarca es quien advierte de esa posible implicancia y aparta al funcionario de estar trabajando en una situación puntual.

¿Por qué es importante detenernos en la integridad vinculado a la imparcialidad?. Yo me voy a detener en lo que dice el Artículo 8 literal i) de la Ley 19.823 que cuando nos habla de los deberes de los funcionarios públicos y sus obligaciones, nos dice que deben “actuar imparcialmente en el desempeño de sus tareas, dando trato y servicio por igual a quien la norma señale, sin discriminaciones político partidarias, de género, religioso, étnico o de otro tipo absteniéndose de intervenir en aquellos casos que puedan dar lugar a origen de interpretaciones de falta de imparcialidad”.

De manera que el servidor público debe abstenerse de actuar, ya no por su propia mirada sino cuando su obrar puede dar lugar a origen de interpretaciones de falta de imparcialidad. De nuevo la norma nos indica que hay que ser y parecer.

Y todo ello nos lleva a la integridad.

La Real Academia nos dice que la integridad refiere a la cualidad de íntegro, y ser íntegro implica ser recto, honesto, e intachable.

Ser intachable, es por eso que las normas hacen referencia al ser y parecer en el obrar ético.

Ahora la gran pregunta es, ¿cómo estudiamos las conductas? ¿cómo vemos esa mirada del ser y del parecer? Desde la óptica de quién es el parecer, porque podríamos pensar que podría llegar a tener un componente subjetivo.

Pues bien, varias normas sobre todo varios Códigos y les voy a referir al Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, cuyos principios han sido adoptados por nuestra Suprema Corte de Justicia como propios, introducen un concepto y es el concepto del “observador razonable”, no sé si alguna vez lo habían escuchado.

El concepto del observador razonable, para ponderar nuestras propias conductas. Ese Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, establece que el Juez y los restantes funcionarios judiciales deben analizar sus conductas de acuerdo a la mirada de un observador razonable. No pueden recibir regalos que sean injustificados desde la mirada de un observador razonable, no pueden mantener reuniones con Abogados o Partes que sean injustificadas desde la mirada de un observador razonable. Entonces cabe preguntarnos, ¿a qué nos referimos con el observador razonable?

Bueno, hablamos de un observador razonable al referir a una persona media, guiada por la sana crítica y por el sentido común, de acuerdo a los parámetros culturales imperantes, una persona media que tenga bien claro lo que está bien y lo que está mal. Y esa es la guía que nos tiene que regir para poder analizar nuestras conductas en esto de que hay que ser y parecer.

Quiero destacar que a instancias de la JUTEP varios organismos públicos han introducido el concepto de observador razonable en sus propios Códigos de Ética internos, como por ejemplo es el caso de INACOOOP (Instituto Nacional del Cooperativismo), Persona Pública No Estatal, que ha sido uno de los que a instancia de la JUTEP acuña este concepto y se guía por el mismo.

Nuestro tercer punto. Tiene que ver con las responsabilidades y la incidencia de la vida privada. Un Profesor muy querido por todos nosotros, el Profesor español Jaime Rodríguez Arana, gran estudioso de estos temas nos dice: me llama la atención esa dicotomía entre virtudes públicas y vicios privados. Y esto es porque la ética - hoy nos decía el Profesor Delpiazzo - la ética, nosotros somos uno solo, y la ética es una sola.

La dividimos en pública y privada de acuerdo al ámbito de actuación en que nos encontremos, y el Profesor Rodríguez Arana dice: la ética pública, la ética en general, no es un abrigo que me pongo cuando voy a desempeñar función pública y me saco cuando voy a mi casa y paso a formar parte de aspectos vinculados a mi vida privada.

Por lo tanto, es necesario ver cómo pueden impactar temas que ocurran en nuestra vida privada en lo que es el desempeño de la función pública.

Entonces la relación es esta, incidencia de la vida privada en el ejercicio de la función pública.

Quiero recordarles, ustedes saben bien, que los servidores públicos estamos sujetos a responsabilidad de diversa naturaleza. Conocemos así la responsabilidad civil, la responsabilidad penal, la responsabilidad administrativa que es la responsabilidad disciplinaria, incluso en algunos casos la responsabilidad política.

Llama mucho la atención el advertir ¿qué pasa con actos de la vida privada que tienen repercusiones en la esfera penal? ¿Cómo repercuten o cómo pueden repercutir en el ejercicio de la responsabilidad disciplinaria?

Bueno, en primer lugar debemos tener en cuenta lo que luce en la diapositiva, la vía penal y administrativa o disciplinaria son independientes, en principio corren por carriles independientes, pero como muy bien ha señalado el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en varias sentencias, yo les cité una del año 2019, "independencia no puede confundirse con indiferencia". De manera que, si bien la responsabilidad penal y la responsabilidad administrativa van por vías diferentes, lo que pasa en una de esas vías, puede eventualmente repercutir en otra de ellas, sobre todo lo que pasa en Penal, puede repercutir en lo que es la responsabilidad disciplinaria. Incluso si se trata de conductas vinculadas a la vida privada.

Y por eso les traje dos casos para analizar con ustedes.

El primero de ellos se trata del ejercicio de la potestad disciplinaria, se sancionó a un funcionario por conductas vinculadas con su vida privada.

Y vean lo que nos dice el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. El Tribunal nos dice, "al funcionario público, le es exigible el mantenimiento de un mínimo de decoro en su vida privada acorde con su investidura "

Y en esta sentencia el TCA recuerda las palabras de nuestro gran Maestro, el Profesor Sayagués Laso, que decía que es necesario contar con dignidad, un mínimo de dignidad y decoro compatible con la función pública.

También se recuerda en esta sentencia las palabras del Profesor Felipe Rotondo que dice que al final del día lo que está en juego, al analizar todo esto, es el buen nombre y la imagen de la



propia Administración Pública. Y de la confianza que los ciudadanos tengan en esas instituciones. Por lo tanto, vean que no resulta ajeno lo que ocurre en la vida privada en lo que tiene que ver con la función pública.

Otro caso que elegí, que ha dado lugar a responsabilidad penal en algunos casos y en otros no, y es un gran tema, vinculado a estos desafíos que nos plantean las nuevas tecnologías como hoy nos hablaba Jorge de la inteligencia artificial.

Bueno, el tema es el uso de las redes sociales por parte de los servidores públicos. Se sorprenderían si vieran los números y analizan cuántos servidores públicos al día de hoy, están en el medio o transcurriendo procedimientos disciplinarios por esta razón.

Y es que somos personas, y por lo tanto tenemos derecho al uso de las redes sociales, pero qué previsiones debemos tener al respecto.

La Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, ha analizado esta temática para los Jueces y los funcionarios judiciales, pero hay conceptos que se pueden extrapolar claramente.

Veán, en primer lugar, la Comisión ha señalado que es el deber de todo Juez en este caso, el evitar manifestaciones que importen incumplimiento de los deberes previstos en el Código de Ética en la Función Pública.

Nos dice la Comisión: el Juez y los restantes servidores públicos que integran la Oficina Judicial, pueden tener redes sociales; claro que sí, e incluso puede ser un buen medio para comunicar objetivos tanto personales como institucionales, pero hay que ser muy cuidadoso.

Y nos pone el segundo punto, "necesidad de evaluar la posibilidad de que las manifestaciones queden fuera de la capacidad de disposición del emisor".

Y a raíz de esto la Comisión elabora una serie de Recomendaciones.

La primera es educar. La primera que nos dice es, "las escuelas de capacitación deben poner el acento en educar sobre el uso de las redes sociales y las implicancias que esto genera".

El Juez, tiene que ser consciente del elevado valor que tienen sus palabras, por lo tanto, debe ser cuidadoso en determinar si se va a identificar o no como Juez en la red social, y en segundo lugar debe ser muy cuidadoso con la lista de contactos y amigos a los que acepta en sus propias redes sociales.

Y el por qué es porque al final del día esas palabras pueden terminar llevando a un descrédito de la propia Administración por posturas que sean netamente personales.

Esto es un gran tema y reitero, al día de hoy existen múltiples procedimientos disciplinarios donde servidores públicos han participado en redes sociales con ciertas manifestaciones y por lo tanto se está analizando si han cometido o no falta administrativa.

Y hasta aquí el análisis de la vida privada. Llegamos así a las reflexiones finales.

Mi primera reflexión final tiene que ver con el título de esta ponencia. Nosotros hablamos de la integridad de los servidores públicos y dijimos que es un "Antídoto contra la Corrupción" y no tengo ninguna duda de lo que puse en el título. La integridad es un antídoto contra la Corrupción, pero no es sólo un antídoto contra la Corrupción.

No alcanza con no ser corrupto; ser íntegro es mucho más.

La integridad tiene que ser vivida por la población. Cuando el ciudadano, la persona en sí, está realizando una fila para ser atendido en un organismo público para realizar un trámite, cuando está esperando ser atendido en un hospital público, cuando está en la Bedelía de un organismo de Educación Pública esperando que le den alguna solución a un problema, y en todo caso en que las personas estamos vinculadas con el desempeño de los diversos cometidos que el Estado desarrolla, en todos esos momentos, la integridad del servidor público tiene que ser vivida por el destinatario del servicio.

El Profesor Delpiazzo nos recordaba que administrar es servir, y si no estamos para servirle a la gente, no tiene razón de ser nuestra propia existencia.

No hay cosa que a los servidores públicos les moleste más que algún ciudadano que cuando está ofuscado le diga "yo te pago el sueldo".

Es así; sin embargo, el "yo te pago el sueldo" tiene un elevado valor porque así es, efectivamente así es, y el día que entendamos que eso tiene un elevado valor, y nos obliga a actuar con integridad todos los días, ese día esa frase dejará de ser un problema para pasar a ser un motivo de orgullo.

Mi segunda reflexión, tiene que ver con cómo logramos todo esto. Bueno, yo quiero decirles que no sabía exacto cuál era el contenido de la ponencia del Profesor Delpiazzo y sin embargo coincidía en esta estructura de pensamiento, tal vez por ser su discípula.

En primer lugar, hay que capacitar, existen normas sobre la capacitación, y en especial voy a destacar una.

El Artículo 28 de la Ley 17.060, Ley Anti Corrupción, establece que "todo funcionario público debe realizar un curso de capacitación al ingreso a la función pública, y luego uno de actualización cada tres años".

Y ahora les voy a preguntar a ustedes, esta norma, ¿es cumplida o incumplida en Uruguay? No sean tímidos, incumplida dicen por ahí, bueno, no les voy a decir lo que pienso yo, les voy a decir.

Esta norma es regla de Derecho, por eso les digo si alcanzan las normas o no. Es regla de Derecho, sin embargo, hay que pensar si se cumple o no.

MESISIC, que es el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, al que hoy la Presidenta de la JUTEP hizo mención, ha analizado si Uruguay cumple o no con las disposiciones normativas y en más de una ocasión ha indicado que el Artículo 28 de la 17.060 es una de las disposiciones más incumplidas en Uruguay. Pero no todo está perdido, porque existen organismos que efectivamente procuran cumplirlo, y lo decimos con conocimiento desde la Junta, uno de ellos en el ámbito público estatal, es el BPS, que tiene un convenio con JUTEP y procura dar seguimiento a esto, y ya ha capacitado a gran parte de su plantilla.

Otro ejemplo donde sí se cumple, es la CND, Corporación Nacional para el Desarrollo en el ámbito de las Personas Públicas no estatales donde nos consta que a partir del convenio con JUTEP brindan un curso al ingreso y luego uno de actualización cada tres años.

Pero ¿desde cuándo capacitamos? Capacitamos a personas que ya están formadas, que ya vienen con su bagaje propio, por lo tanto, creo que hay que reivindicar esto de comenzar a capacitar desde la niñez.

En los países que tienen menores casos de Corrupción, comienzan a capacitar a los cinco años de edad. Y existen iniciativas a nivel internacional en esta materia, una de ellas es una iniciativa de Naciones Unidas que se llama E4J (Education for Justice), que lo que busca es capacitar niños, por un lado, adolescentes y jóvenes, pero partiendo desde la niñez, con juegos, donde los niños son un lienzo en blanco, y ayudan también a cambiar conductas a los mayores.

O ¿no nos han ayudado nuestros niños a cambiar conductas vinculadas con el Medio Ambiente? Si yo llego a tirar un papel en el piso y me ve mi sobrina, puedo asegurarles que mi vida corre peligro.

Y seguramente a todos nos pasa lo mismo, entonces los niños son un agente, un motor de cambio.

En segundo lugar, tenemos que buscar la sensibilización. Hay que sensibilizar sobre estos temas, no basta con ir a un curso e irse. Tienen que estar arriba de la mesa estos temas, en la discusión familiar, y aquí voy a evocar a alguien que fue una gran maestra mía en los temas de Ética Pública, y es la Dra. Gaby Ledesma, quien decía “educar en materia de ética”, - y acá viene un tema muy difícil -, educar para que entendamos que el Estado somos todos, educar para hacer caer pre conceptos”

Y ella proponía este ejercicio. Decía, piensen en un compañero de ustedes, en cualquier compañero de ustedes funcionario público, ahora piensen en esa persona, metiendo le la mano en el bolsillo a alguien, no se lo imaginarían verdad, porque esa persona no roba en nuestra cabeza. Es lo que decía la Dra. Gaby Ledesma, sin embargo, esa persona si se lleva una resma de hojas A4 del organismo o las lapiceras, ahí no lo vemos mal, y sí lo podemos tal vez imaginar que lo haga, y en ¿qué cambió la primera situación con la segunda? En nada decía la Dra. Ledesma, por tanto, tenemos que seguir pensando en nuestros conceptos. No hay diferencia entre meterle la mano en el bolsillo a alguien, o llevarse la resma de hojas A4 del organismo al que pertenecemos.

Y, en tercer lugar, hay que lograr el control. Yo quiero decirles que hay un autor muy importante, el Dr. Reisman que dice que en toda sociedad hay un sistema mítico y un código práctico; el sistema mítico está dado por el conjunto de normas que rigen en un momento determinado, pero en paralelo está el código práctico que tiene que ver con aquellas conductas que la sociedad está dispuesta a tolerar.

Tenemos que avanzar en eso y sensibilizar para lograr también el control. El control interno, el control de nuestros pares, que, si vemos al compañero nuestro que hace algo indebido, podamos tener una primera charla con él, eso es muy importante. Por supuesto que también los controles institucionales, tanto a nivel interno como el control externo. Son fundamentales para que la ética sea una realidad.

Y aquí les traje dos casos muy cortitos, sobre la importancia del control.

Uno fue realizado por JUTEP. En el año 2018 JUTEP recibió varias denuncias sobre contrataciones de familiares en Intendencias del interior del país, y les recomiendo este dictamen de la Junta de 21.2. 2018 donde concluye que efectivamente existen situaciones que vulneran las prohibiciones previstas normativamente. Pero, además, dice JUTEP, existen otras circunstancias donde no se vulnera ninguna norma y sin embargo exteriorizan la apariencia de actuar en contra de las normas de conducta en la función pública. Esto también es control, siendo que la JUTEP en su momento, lo comunicó.

Otro caso de control - ustedes saben que yo soy funcionaria de carrera del Tribunal de Cuentas - tiene que ver con la importancia del control externo, también en la materia.

El caso es un Ente Autónomo realizó dos procedimientos licitatorios donde se presentó como oferente una empresa de la cual sus representantes y Directores eran funcionarios del organismo contratante, lo cual está prohibido por la normativa por supuesto, y no contentos con eso, no sólo eran funcionarios del organismo, sino que además trabajaban en la Oficina donde se redactó el pliego de condiciones particulares que regiría esos llamados.

El organismo, los jefes del organismo lo advirtieron a tiempo y entendieron que la oferta era inadmisibles, y cuando llega al Tribunal de Cuentas, refrenda ese proceder, pero, además, va un paso más y dice, es necesario el esclarecimiento de los hechos.

Está haciendo referencia a que no basta sólo con haber tomado medidas, en relación a lo sucedido en estos procedimientos en sí, qué pasa con la responsabilidad de los servidores públicos que actuaron en la materia, por tanto, vean la trascendencia que tienen estos controles.

Mi tercera reflexión tiene que ver con la necesidad de ser conscientes de la importancia de la percepción. Cómo nos ven. La percepción es fundamental porque genera la confianza, la imagen genera la confianza en las instituciones.

Y siempre pensamos en este mapa que ven allí, que es el mapa que realiza anualmente Transparencia Internacional donde Uruguay está primero en América Latina como el país que tiene menor grado de percepción de la Corrupción. ¿Esto significa que tenemos que estar felices porque tenemos la vacuna anti corrupción? Por supuesto que no. Estamos mejor que otros, pero miren el mapa de nuestra América donde existen países que están en rojo y otros que prácticamente están en bordeado y prácticamente a punto de desaparecer del mapa. Esto nos tiene que llevar a redoblar esfuerzos. Somos los que estamos primeros, pero esto no quiere decir que no se dan situaciones de corrupción, tenemos que seguir trabajando por la integridad todos los días.

Y mi última reflexión es esta, ya desde hace años vengo hablando de que existe un derecho humano a la ética pública y a una Administración con cero tolerancia a la Corrupción.

El Artículo 72 de la Constitución de la República establece que los derechos deberes y garantías que nuestra propia Carta Magna prevé, no son los únicos, sino que también están aquellos que derivan o son inherentes a la personalidad humana y aquellos que derivan de la forma republicana de gobierno.

Díganme, si contar con funcionarios íntegros que nos atiendan bien y que desempeñen bien sus tareas, no es un derecho inherente a la personalidad humana. Y si no forma parte del concepto de República. Yo creo que lo es, por eso, esta es mi reflexión del día de hoy. Estos son ustedes, soy yo, somos todos nosotros.

Cuando salgamos hoy por la puerta de esta Salón, no es gratuito estar en este salón, estamos en uno de los salones más importantes de la Casa de la Democracia hablando en el Día internacional contra la Corrupción.

Lo que nos tenemos que preguntar es, qué vamos a hacer cada uno de nosotros cuando crucemos esa puerta y retornemos hoy a nuestras actividades diarias.

Hoy hablábamos de Aristóteles en esto de promover hábitos, Aristóteles decía que somos lo que hacemos día a día, de manera que la excelencia, no es un acto, es un hábito.

Yo no tengo fórmulas mágicas, pero soy consciente de una cosa: la manera que tenemos de hacer que el mundo sea mejor, de tener un ambiente libre de Corrupción, y mucho más que tener un ambiente libre de Corrupción, de tener un régimen de la función pública basada en parámetros de integridad, es saliendo por esa puerta, a dar el ejemplo porque las conductas negativas se contagian, pero las conductas positivas también.

Por lo tanto, voy a finalizar agradeciendo a todos por este tiempo, con una frase de Albert Einstein sobre el ejemplo.

Einstein decía "dar el ejemplo no es la mejor forma de influir en los demás; es la única forma".

Hagamos de la integridad una realidad de todos los días.

Muchas gracias.

**Moderadora:** Muchas gracias a todos, invitamos ahora nuevamente a la Dra. Gabriela di Longo para el agradecimiento y unas palabras finales.

**Sra. Presidente de JUTEP. Dra. Gabriela di Longo:** Les quiero agradecer a los expositores que tuvimos hoy, fue un placer escucharlos a cada uno, y por eso pido un gran aplauso para ellos, por todo lo que aprendimos. Muchas gracias

Agradecer al Vice Presidente del Directorio Contador Guillermo Ortiz que se encuentra en la mesa acompañándonos, la Dra. Ferraris está con un tema de salud y no pudo acompañarnos, y agradecer a todos los funcionarios de JUTEP que están aquí acompañándonos. Como dijo la Dra. Pinto, son el motor constante de este organismo, los Directorios cambian, pero ellos siempre están allí defendiendo su organismo a capa y espada. Así que gracias a ellos y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este evento.